RF-73

Vanguardia Obrera

ORGANO DEL COMITE CENTRAL DEL PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA (MARXISTA-LENINISTA)

Año XXVII / Número 794 — Del 20 de mayo al 10 de junio de 1992 — Precio: 100 pts.

EDITORIAL

Ante la Huelga del 28 de mayo

Se necesita más

El PCE(m-l) apoya y se une a la convocatoria de huelga general del próximo 28 de mayo.

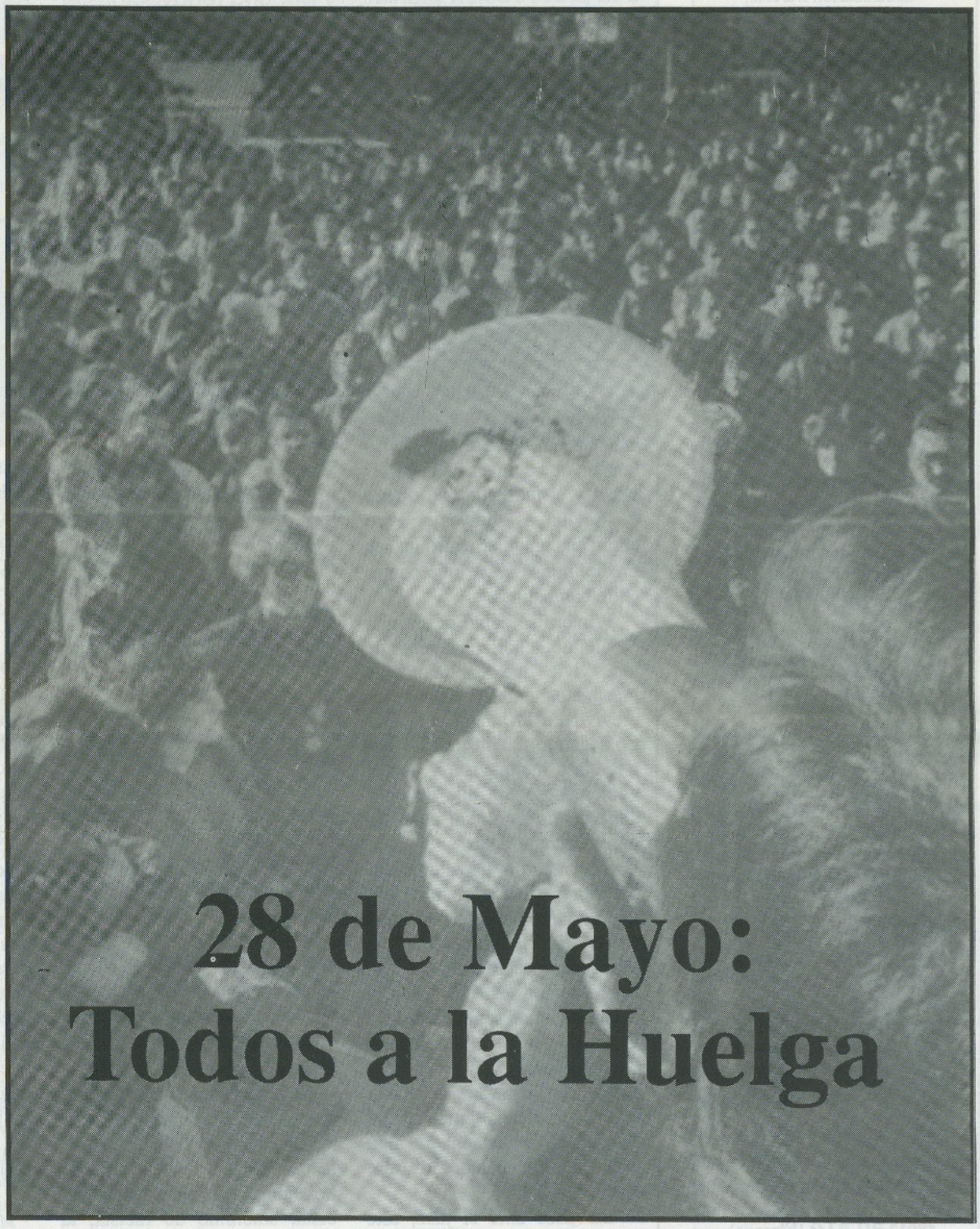
La política económica del gobierno, las medidas contra los trabajadores, el recorte sistemático de los gastos sociales, el asalto al subsidio de desempleo, la nueva ley anti-democrática de huelga por no hablar de otras medidas de tipo parafascista (ley Corcuera) y formas de actuación autoritaria (gobernar por decreto) constituyen todo un frente de ataque a las condiciones de vida y trabajo, a las conquistas históricas de la clase obrera y hasta a los avances democráticos formales –precarios como se ve– laboriosamente conquistados tras la muerte del dictador.

Falta, lo sabemos, una alternativa política global, diferenciada y socialmente transformadora que encuadre las respuestas parciales y puntuales a la ofensiva gubernamental.

Cada jornada de lucha es un momento idóneo para plantear este problema. La ofensiva del gobierno se realiza sobre esta reflexión previa: por la izquierda no hay contestación operativa, es decir, capaz de hacerle cambiar sus medidas, a lo sumo, gestos; no hay contestación en el parlamento, a lo sumo, frases.

En lo sindical, nos encontramos igualmente con deficiencias y límites importantes. Los modelos de organización, acción y representación no han seguido la evolución de la crisis capitalista, ni estan respondiendo adecuadamente a los nuevos marcos de relaciones laborales y de mercado de trabajo y a las nuevas formas de producción. No se trata de ser interlocutores válidos para la patronal y el gobierno, sino, sobre todo, de ser instrumentos válidos, es decir, con capacidad para la conquista real de mejoras generales y no sólo sectoriales, para el conjunto de los trabajadores y, muy en particular para aquellos a quienes la crisis y las necesidades e intereses del capitalismo ha situado en peores condiciones: jóvenes, mujeres, precarios y parados.

Frente a la ofensiva capitalista de la patronal y el PSOE falta alternativa política de izquierda, falta una acción y un discurso políticos a la altura de los muy duros tiempos que vivimos y el modelo sindical establecido exige también una importante puesta al día. Las voces críticas en los sindicatos, que las hay y muchas, han de coordinarse y plantear un debate serio, de fondo y no simplemente limitarse a exigir, a veces con no demasiado sentido, más radicalismo. Los problemas son más graves y de mayor calado. (SIGUE EN PAG. 2)



28 de Mayo: Todos a la Huelga

Pleno del Comité Central del PCE (m–l) (Página 4)

ENTREVISTA

ÁNGELES MAESTRO, diputada por I.U. en el Parlamento: ***«El gasto sanitario público se mantiene desde 1982, y ahora se quiere reducir»*** (Páginas 7, 8 y 9)

Sedes PCE(m-l)

SEDE CENTRAL
C/Libertad, 7,3º dcha.
28004 MADRID
Tfno. (91) 532 76 66
FAX. (91) 531 83 58

ANDALUCÍA
Apartado de Correos 7175
41080 SEVILLA
Apartado de Correos 26
41400 ECIJA (Sevilla)
Urbanización Barceló,
local 10 Avda. Europa
29003 MALAGA
Apartado de Correos 551
ALGECIRAS (Cádiz)

ARAGÓN
Apartado de Correos 11053
50003 ZARAGOZA

ASTURIAS
Apartado de Correos 1315
33080 OVIEDO

CANARIAS
C/ Venegas, 32, 1º
35003 LAS PALMAS
(Gran Canaria)

CASTILLA-LA MANCHA
Apartado de Correos 77
02002 ALBACETE
Apartado de Correos 108
13200 MANZANARES
(Ciudad Real)

CASTILLA-LEÓN
Apartado de Correos 3214
47080 VALLADOLID

CATALUÑA
Librería Internacional
C/ Ausias March, 141, 4º, 3ª
08013 BARCELONA
Tfno. (93) 232 57 32
Apartado de Correos 7
08210 **BARBERÁ DEL VALLÉS (Barcelona)**
Apartado de Correos 3118
08905 HOSPITALET DE LLOBREGAT (Barcelona)
Apartado de Correos 532
17080 GIRONA
Apartado de Correos 613
25080 LLEIDA
Apartado de Correos 984
43080 TARRAGONA

EUSKADI
Asociación Cultural
"Herriko Haizea"
C/ Iparraguirre, 64
48012 BILBAO (Vizcaya)
Apartado de Correos 967
20080 SAN SEBASTIAN
(Guipúzcoa)
Apartado de Correos 1355
PAMPLONA

GALICIA
Apartado de Correos 413
15480 FERROL (A Coruña)

MURCIA
Apartado de Correos 20
30550 ABARAN (Murcia)

PAÍS VALENCIANO
Plaza Manises 2, pta. 15
46003 VALENCIA
Tfno. (96) 392 30 95
Apartado de Correos 4099
03080 ALICANTE
Avda. País Valencià, 36 bajo
46400 CULLERA
(Valencia)

ORGANIZACIÓN

Editorial...

(Viene de pag. 1) **El 28 de mayo, todos a la huelga, es lo mínimo, pero los problemas seguirán ahí. Se necesita más. El gobierno lo sabe y hasta se permite pasar a la provocación planificada y consciente. Sabe que algo le falla a la izquierda y que una respuesta eficaz, contundente, capaz de doblegarle se hace difícil. Nosotros también lo sabemos, pero lo difícil no es imposible. Estamos y trabajamos por un nuevo proyecto revolucionario y por una renovación de los modelos sindicales. Y todo ello no es sólo cuestión de debate, es cuestión de lucha. El 28 de mayo es una respuesta limitada, pero es, de momento, la única para la clase obrera y es tambien una oportunidad de encuentro, de lucha y esclarecimiento de lo que necesitamos para avanzar.**

¡28 de mayo, todos a la Huelga General! ■

Colaboración

Expo + RENFE = Racismo

JULIA GUERRA*

Durante meses hemos soportado y seguimos haciéndolo anuncios sobre la Expo 92. La imagen que a través de la publicidad y el marketing se ofrece de Sevilla es atrayente. Pero como en cualquier teatro que se precie, nunca se ve qué ocurre entre bambalinas.

Primero se habló de limpiar Sevilla de «chorizos», gente de mal vivir que habitualmente mangan carteras ajenas para sobrevivir en la jungla del paro. Lo segundo fue sustituirlas por una clase mejor vista y que el gobierno asegura que de ellos depende la seguridad ciudadana, es decir, policías.

Sin embargo, decidieron entrar por la fuerza en un campign donde pacíficos turistas, en su mayoría extranjeros, pasaban sus vacaciones. Me refiero a Mairena de Alcor. Fue la respuesta a una sentada frente a la Expo como manifiestación de quienes no están de acuerdo con ella. Pensaron –un error que pagarían mas tarde– que la libertad de expresión era algo más que una palabra o frase electoralista.

Llevados ante el juez, éste los absolvió. Decretó libertad sin cargos pero la policía los sacó del país. La mayor parte eran alemanes aunque también había un italiano, un turco residente en Suiza, un noruego y un sueco. Fueron acusados de desórdenes públicos, cargos que según su abogada, Julia García Ayesa, no han sido probados. Dos residían en Sevilla con su pareja. Lo mismo ocurría con Gunar Johansson, vecino de Pamplona, que al igual que 41 extranjeros más, amparándose en un artículo de la Ly 7/1985 fue llevado hasta la misma frontera sin escatimar medios...

Algunos han vuelto; los países a los que pertenecían eran comunitarios, pero Gunar, si la ley no corrige este abuso de poder, tardará cinco años en volver. Se ha presentado recurso. Y mientras tanto se habla de conspiración internacional...

Ya conocía las maravillas del «fino» andaluz pero no sus efectos alucinógenos...

Bajo sus influjos la RENFE se ha pasado tres pueblos ¡Mira que es difícil porque no llegan nunca a la hora! Pero el AVE se les ha subido a la cabeza. Enarbolando el más puro estilo fascista, sinónimo de racista, la circular de incidencia de RENFE, elaborada por la Dirección de Seguridad Corporativa de esta empresa pública, en su punto 54 dice:

«RENFE considera grupos de riesgo indentificados o expulsados, delincuentes comunes, lesbianas, mendigos, vagabundos, punkys, prostitutas, objetores o cualquiera persona que con su actitud perturbe la tranquilidad de los viajeros y ponga en peligro la imagen de la empresa».

Como respuesta a esta grave agresión, el pasado día 14, jueves, unas cien personas que nos autodenominábamos «Grupos de alto riesgo» bajamos a RENFE para protestar.

SOS Racismo Navarra, quiere denunciar todo este tipo de abusos que atentan contra la dignidad humana y suponen una falta de respeto y una burla descarada y vergonzosa de los derechos humanos. Queremos hacer patente, una vez más, la solidaridad con las personas que sufren las consecuencias de una política errónea dentro de un país gobernado por socialistas... Y pedimos la derogación de la Ley de Extranjería.

** Miembro de SOS Racismo Navarra*

FERIA DEL LIBRO DE MADRID

Caseta numero 70 ■ Ediciones V.O.S.A.Del 29 de mayo al 14 de junio ■ Paseo de coches del Retiro

Novedades

■ ***Narrativa Vasca actual*** **(antología de Julia Otxoa)**

■ ***Diario de Yugoslavia*****, de Luisa F. Garrido Ramos**

DE LA PRENSA

Alemania

La inmigración es posible

Alemania necesitará en los próximos 25 años como mínimo 300.000 inmigrantes por año a fin de que se produzca una grave carestía de mano de obra. Así lo ha manifestado el Instituto de la Economía Alemana. Este organismo constata que los desplazados de etnia alemana procedentes de la parte central y oriental de Europa, así como los solicitantes de asilo, no son una carga para el mercado del trabajo alemán. Al contrario, cubren los huecos que en lo que atañe a la oferta de mano de obra se producen como consecuencia de la evolución demográfica. Sin inmigrantes el número de personas en activo disminuiría en 4 millones de personas hasta el año 2010.

La causa de ello son los bajos índices de natalidad. Incluso ocurre que desde mediados de los años setenta el número de nacimientos es inferior al de fallecimientos. Si la tendencia actual se mantiene, habrá en al año 2030 casi 20 millones de alemanes menos que ahora. Entonces el porcentaje de alemanes menores de 15 años descenderá a 10 millones, de los 13,7 millones actuales.

Por lo demás, la aceleración del procedimiento de asilo sólo será de todas formas posible si se elimina la insuficiente dotación personal de que adolecen los órganos de decisión en la Administración y los Tribunales. La DGB exige que se conceda a todo solicitante de asilo el derecho a ser asesorado por un abogado. Por otra parte, todo solicitante de asilo debe tener derecho a declarar por medio de un intérprete ante el órgano de decisión y, en caso de ser desestimada su solicitud, a hacer que esta decisión sea controlada como mínimo por una instancia. Mientras no haya recaído una decisión judicial, no se deberá expulsar al solicitante de asilo. A lo que hay que añadir que durante la tramitación del expediente el solicitante debe tener derecho a vivir en condiciones dignas.

[Reproducido del «DGB Informa», boletín de los sindicatos alemanes para trabajadores españoles.]

Se mantiene la recesión capitalista

La sociedad sobre un barril de pólvora

Hasta fines de 1990, el capitalismo neoliberal se regalaba los oídos con una especie de Juegos Florales dedicados a sí mismo y a su irrefutable y definitivo triunfo universal. De la mano de dicho triunfo, la historia asistía al ocaso de las guerras y a la pacífica entronización de un nuevo orden mundial de paz, diálogo y concordia. Apenas unos meses después, estalló la Guerra del Golfo y, desde entonces, parecen haber transcurrido siglos. La edulcorada melodía de aquellos días ha desaparecido y, en su lugar, retumban ahora unos acordes cargados de angustia e incertidumbre, a los que no es ajeno el tableteo de las armas, erigidas como protagonistas de unas guerras que han pasado de ser remotas y ya superadas pesadillas del pasado a enquistarse sin remedio aparente en la mismísima periferia de Europa.

La sociedad capitalista que, en 1990, celebraba su triunfo se agita ahora desgarrada por sus propias contradicciones internas, una vez que, desaparecido el "enemigo exterior" que antes las solapaba, estallan a plena luz torrencialmente.

Elementos de la Guardia Nacional vigilan las calles de Los Angeles.

LA RECESION ECONÓMICA DE FONDO

Según el Fondo Monetario Internacional (FMI), la economía mundial tuvo, en 1991, un crecimiento negativo del 0,3%. En su informe semestral recién presentado en Washington, el FMI confirma la recesión y rebaja a la mitad la previsión de aumento del PIB para el conjunto de la economía mundial, realizada y hecha pública por él mismo en octubre pasado. Una vez más, los expertos retrasan así la perspectiva de una salida de la crisis (prevista, inicialmente, para el último trimestre del 91), al tiempo que señalan el déficit público de la mayoría de los países desarrollados como el principal obstáculo para el desarrollo y recomiendan a Europa una reforma laboral que incluya la reducción de subsidios por desempleo y el recorte (sin ampliación de ingresos) del gasto público, en sintonía con el reciente "decretazo" del gobierno de Felipe González. Todo ello en un momento en que, según el propio FMI, por primera vez en los últimos 15 años, los países industrializados registraron una destrucción de empleo neto y se prevé que tal tendencia se mantenga este año en la CE, ante lo cual se apuntan medidas que, amén de los recortes a los subsidios de desempleo, tienden a equiparar a la baja las condiciones entre ocupados y parados, con el incremento de la precarización y el descenso nominal de los salarios mínimos establecidos por ley.

La principal razón aducida para esta situación es la recesión de los EE.UU. (-0,7%) que no ha podido ser compensada por el fuerte crecimiento de Japón (4,5 %), el moderado aumento de la CE (0,8%) o el relativo relanzamiento de los países en vías de desarrollo (3,3%). Por otra parte, la cifra global no recoge los resultados de los estados esteeuropeos, cuyas economías cayeron en un 16,9%.

Los intentos de solución, por el momento, están colapsados por las contradicciones entre los grandes. El G-7 no ha sido capaz de llegar a acuerdo alguno, salvo un protocolario y vacío comunicado. La Ronda Uruguay del GATT, que el propio FMI sitúa como condición indispensable para la reactivación económica, está igualmente bloqueada.

Paralelamente, el PNUD (Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo) ha hecho público su informe sobre el desarrollo en el mundo, del que se ocupa otro artículo de este mismo periódico, y señala en él que, en las 3 últimas décadas, el foso entre pobres y ricos se ha duplicado, y que los 1.000 millones de personas más ricas lo son 150 veces más que los 1.000 millones más pobres.

UN PARADIGMA DE LA CRISIS: EL CASO EE.UU.

Si los EE.UU de Reagan fueron el paradigma de la política socio-económica del neoliberalismo, la situación actual de esa potencia es, igualmente, un paradigma de sus consecuencias y, en buena medida, del marco económico general de los países industrializados, con la excepción relativa de Japón.

El paro alcanza en los EE.UU. el 7,4% de la población activa. El número de bancarrotas alcanzó, en 1991, su nivel récord, con un total de 87.266 empresas afectadas. Durante los 3 primeros meses de 1992 las ventas de la empresas estadounidenses alcanzarán su nivel más bajo desde 1983. La emblemática General Motors, primera empresa de automóviles del mundo, reconoce pérdidas de 4.450 millones de dólares (cerca de medio billón de pesetas), con lo que alcanza la cifra más negativa de resultados de una corporación norteamericana en toda la historia. Debido a ello, prepara un plan de reestructuración que supondrá el cierre de 21 plantas, el despido de 74.000 trabajadores en los próximos cuatro años, y una rebaja salarial del 10% para todos los trabajadores. El total de pérdidas de las tres principales compañías de automóviles norteamericanas (GM, Ford, Chysler) ascendió, en 1991, a la escalofriante cifra de 7.500 millones de dólares.

En otro plano de análisis, el profesor Wallace C.Peterson (Universidad de Nebraska), publicaba en la revista **Challenge**, el artículo "The Silent Depression", en el que, basándose en el nivel medio de ingresos reales por familia como indicador respecto a la salud del sistema económico, apuntaba la tesis de que la economía norteamericana atraviesa una depresión desde **¡1973!**. En efecto, según su estudio, a pesar de la larga expansión de los 80, los salarios han mantenido un crecimiento negativo que les ha hecho pasar, en términos reales, de una cifra máxima de 327,4 dólares constantes (a la semana) a los 274,6 dólares en 1990. Esto significa que los salarios semanales reales eran, en 1990, inferiores en un 19,1% a los de 1973. Paralelamente, la tasa global de productividad cae, desde aquel año, a una media anual del 0,83%; el empleo en la industria manufacturera cae desde el 27,3% en 1970 al 17,3% en 1990; el nivel de rentas familiares medias ha disminuido, entre 1977 y 1988, en un 14,8% para la décima parte de las familias de ingresos más inferiores, mientras que, en el mismo periodo, para la décima parte de las familias con rentas más altas ha aumentado en un 16,5%, en un 23,4% para el 5% de las más altas y en un 49,8% para el 1% superior. Paralelamente y en el mismo período, las tasas impositivas globales han aumentado para el décimo de familias de rentas más bajas en un 20%, mientras que para el 5% de rentas superiores ha descendido en un 9,5%, y un 19,4% para el 1% de rentas más altas.

Las políticas presupuestarias y de ajuste establecidas como soporte de estas políticas económicas conllevan necesariamente dos corolarios sociales: a) la **desintegración social**, esto es, la pérdida de credibilidad y capacidad integradora del sistema político, la oligarquización de las decisiones políticas y económicas y la masificación de la marginación; y b) el **incremento de la represión** como instrumento de (forzosa) cohesión social, de sometimiento de las crecientes minorías marginadas y, en última instancia, de mantenimiento del modelo económico y social.

Si estos fenómenos son evidentes en todo el mundo desarrollado, también el caso EE.UU. resulta paradigmático.

LAS POLITICAS SOCIALES

La reciente explosión social de Los Angeles ilustra por sí misma una realidad: las sociedades industrializadas del capitalismo neoliberal están sentadas sobre un barril de pólvora. (Y, consiguientemente, las relaciones entre unas y otras de estas sociedades tienen el mismo nivel de conflictividad latente que les caracteriza en el plano interno.)

En el conjunto de la sociedad norteamericana, la cuestión racial, de la minoría negra, vale como ilustración suficiente. De los 8,5 millones de negros americanos que, en 1980, vivían por debajo del límite de la pobreza se ha pasado a cerca de 10 millones en la actualidad. El 40% de los niños negros viven hoy en condiciones inferiores a dicho límite. Los habitantes de Harlem, el suburbio negro de Nueva York, tienen, según el reciente y ya citado informe del PNUD, una esperanza de vida de 46 años, inferior a la de los habitates de Bangladesh (número 138 en orden de países según dicho informe). También según el PNUD, Estados Unidos registra la mayor cantidad de presos: 426 por cada 100.000 habitantes. Sólo en Los Angeles, con un producto bruto equivalente al de toda la India y una población de menos de 9 millones de habitantes, existen 40 prisiones y se están construyendo más. Los negros varones representan sólo el 6% de los norteamericanos, pero suponen el 46% del total de presos...

En el reciente y ya citado Informe del PNUD han desaparecido los datos relativos a libertades políticas y derechos humanos, cuyos resultados serían, con toda probabilidad, tan alarmantes como clarificadores. Una superficial mirada a la ola de estallidos sociales, auge de racismos, integrismos y xenofobias, movimientos fascistas y neonazis, conflictos armados, etc. que sacuden hoy el mundo basta para aconsejar la no indiferencia. Sin pretensiones de augur y rehuyendo ramplones catastrofismos, la situación actual de la economía y la sociedad mundiales supone una llamada de alerta a todos los revolucionarios, demócratas y progresistas. Tal vez más claramente que nunca antes se plantea, al calor de esta salvaje crisis del capitalismo, la histórica encrucijada: socialismo o barbarie.

A.Pacheco

Pleno del comité central del PCE (m-l)

COMUNICADO

El 8 y 9 de mayo tuvieron lugar las primeras reuniones, tras la celebración del VI Congreso del PCE (m-l), de las Comisiones centrales y la del Pleno del Comité Central.

En el Pleno se presentaron las conclusiones y primeros planes de trabajo de la Comisión del área sindical, de la Comisión de organización, de la Comisión de prensa y formación y de la Comisión de movimientos sociales y juventud.

El Comité Central discutió ampliamente la convocatoria de huelga general limitada del próximo 28 de mayo y reanudó el debate sindical abierto ya con la Conferencia celebrada hace meses y con el reciente VI Congreso.

El Comité Central decidió apoyar e impulsar la Jornada del 28 de mayo y plantear la necesidad de una lucha multilateral y sostenida contra el llamado "decretazo" y contra el conjunto de medidas económicas del gobierno.

El debate abierto en el Cté. Central trató el tema de la insuficienia del actual modelo sindical y de la necesidad de articular y coordinar las voces críticas presentes en CC.OO., mediante algunas grandes líneas que aborden la renovación y puesta al día del discurso y de la práctica sindical.

El Cté.Central aprobó el plan de publicaciones presentado por la Comisión de Prensa y formación:

* Publicación del *Cuaderno Debate* número 8, dedicado al tema "Vigencia del marxismo",

* Publicación del *Cuaderno Debate* número 9, dedicado al tema "Modelo sindical".

Igualmente, se presentó un primer proyecto de cursos de formación para cuadros y se informó de las primeras gestiones para el lanzamiento de una nueva publicación progresista y de izquierda revolucionaria que sustituirá al actual VANGUARDIA OBRERA.

El Comité Central, por último, realizó un análisis del momento político de transición que vive el partido. El Cté. Central llama a impulsar la formación de núcleos constituyentes de un nuevo partido comunista en unión con todos aquellos, ya sean independientes, o miembros o votantes de otros partidos, que compartan con nosotros la inquietud y la necesidad de una opción marxista y revolucionaria, anticapitalista y perfectamente diferenciada tanto de quienes se sitúan al lado del imperalismo-capitalismo, como de las derrotadas o residuales burguesías burocráticas del este europeo o de otras partes del mundo. •

Madrid, 9 de mayo de 1992

Reunión del área sindical del Comité central:

Algunas valoraciones de actualidad

El pasado 9 de mayo se reunió la comisión sindical del Comité central para abordar diversas cuestiones que están hoy en primer plano de actualidad del movimiento obrero y sindical.

En primer lugar, la huelga del día 28. Es evidente que el propio proceso de desarrollo del sistema imperialista-capitalista está llevando a la adopción de medidas económicas que escapan cada vez más a la "voluntad" exclusiva del Gobierno de Felipe González y que tienen su referencia y su impulso en los grandes centros mundiales del poder, desde el Fondo Monetario Internacional hasta el G-7 o los acuerdos de Maastrich.

La Convergencia Europea va a a tener, ya hay anuncios de medidas similares en otros países de la Comunidad, repercusiones graves para la mayoría de los asalariados, muy particularmente en lo que se refiere al recorte de los presupuestos de los servicios públicos.

En España, un primer desarrollo de esta política va dirigido contra unos sectores de la población (sobre todo jóvenes, mujeres y trabajadores en precario), que siendo los que más aportan al Producto Industrial Bruto, los que más producen cuando trabajan, están sin embargo situados en terrenos de marginación, incluso de los sindicatos.

En este contexto es obvio que hay razones más que justificadas para una movilización contra la política del Gobierno en general y contra el "decretazo" en particular y que es necesario actuar para apoyar y sacar adelante allí donde estemos la huelga del día 28. Eso sí, sin dejar de plantear al mismo tiempo, de la forma más adecuada, nuestra crítica a algunas de las posiciones de las direcciones sindicales, como son :

1.- La alternativa socialdemócrata que están propugnando, que se refleja en manifestaciones como: "los acuerdos de Maastrich se pueden desarrollar de otro modo"; "es posible la Europa social en la coyuntura que vivimos y el estado del bienestar" o "es posible otro Plan de Convergencia".

Planteamientos clara y ortodoxamente socialdemócratas en los que están coincidiendo tanto las direcciones de UGT y CC.OO., como las de IU o sectores críticos del PSOE.

2.- La crítica y reflexión sobre el actual modelo sindical, que precisamente cuando se producen este tipo de movilizaciones muestra algunos de sus rasgos más negativos:

* Su falta de democracia interna y de participación en las decisiones importantes;

* Su tendencia a defender a un sector determinado de trabajadores, esencialmente los fijos y los funcionarios, y quedarse al margen de los sectores citados anteriormente que más se están desarrollando en la actualidad;

* Su propio modelo de lucha, directamente relacionado con el modelo sindical y que está sirviendo, de hecho, para hacer más tragables las medidas del Gobierno y de las patronales. En el caso del "decretazo" volverá a ocurrir que, si tras la huelga se modifican algunos de sus aspectos formales, pasará a contar con un amplio apoyo popular sin haber cambiado, de nuevo, lo esencial de su contenido.

En lo que se refiere a la Ley de huelga, la Comisión del Comité Central tuvo un rico debate, resaltando entre otros aspectos que se haya propuesto en unos momentos de debilidad de la izquierda y el contenido demagógico que la ha dado el Gobierno, intentando hacer pasar leyes que son claramente restrictivas para los ciudadanos como "garantías" de sus derechos democráticos.

La autorregulación sindical de la huelga sólo es aceptable, por otra parte, desde la perspectiva de su mayor éxito y eficacia y con el objetivo de lograr un mayor apoyo de aquellos sectores de ciudadanos que se vean afectados por la misma. Y en la determinación propia de cuáles deben ser, en cada caso, los servicios mínimos imprescindibles.

En este sentido es muy escasa la información y el debate en el seno de los sindicatos sobre las negociaciones que se están llevando a cabo entre los dirigentes sindicales y el Ministerio de Trabajo. De ahí la propuesta de promover y desarrollar este debate sobre la Ley de huelga y la autorregulación sindical de la misma en las federaciones en las que estén presentes militantes y amigos del partido.

Un plan de trabajo, un calendario de futuras reuniones y formas ágiles de conexión, de transmisión de experiencias y sugerencias entre todos los camaradas que trabajan en este importante área del partido han sido finalmente algunos de los importantes acuerdos adoptados.

Confederación Europea de Sindicatos (CES)

Hace falta algo más que solidaridad formal

El día 8 de este mes la CES hacía pública una declaración de solidaridad con la lucha de los trabajadores españoles, en la que señala:

«La CES y sus organizaciones afiliadas han propuesto un modelo de construcción europea de fuertes contenidos sociales, incompatible con las formulaciones restrictivas y lesivas para los derechos y prestaciones sociales que algunos gobiernos, como el Gobierno español, pretenden imponer. Ni la convergencia comunitaria ni los acuerdos de Maastrich pueden servir de pretexto para actuaciones como el reciente decreto, que recorta sustancialmente las prestaciones del seguro de desempleo.

No pueden justificar toda una orientación de la política económica, que comporta evidentes riesgos de recesión, con sus secuelas negativas para el crecimiento y el empleo, en tanto que se rehuye el compromiso de la industrialización.

Además, la CES considera inaceptable que los gobiernos actúen con respecto a los programas de convergencia europea sin dialogar con las organizaciones representativas de los trabajadores.

Y finaliza transmitiendo a los trabajadores españoles la solidaridad y apoyo de 45 millones de trabajadores europeos en el paro del 28 de mayo y las movilizaciones que se proponen llevar a cabo UGT y CC.OO.»

Bienvenidas sean todas las declaraciones de solidaridad, que como tales tienen un valor. Ahora bien, a la CES le correspondía, en la actual situación en Europa, algo más que ir apoyando formalmente las movilizaciones de los trabajadores que en distintos países europeos están produciéndose y que, con toda probabilidad, van a seguir apareciendo, dado que las directrices establecidas en Maastrich van a traducirse en medidas antiobreras en todos los países comunitarios, por las propias exigencias de desarrollo del sistema capitalista en el tiempo que vivimos. Recortes presupuestarios, privatizaciones, contención de salarios, etcétera, van a ser, están siendo ya, en mayor o menor medida, también comunes.

La CES, como la mayor confederación sindical europea, que agrupa a los sindicatos más potentes (TUC inglesa, DGB alemana, CGIL italiana, UGT y CC.OO. en nuestro país), tiene capacidad –otra cosa es la voluntad– para coordinar e impulsar luchas de ámbito continental, para promover la solidaridad material, y este sería el objetivo a promover desde los sindicatos miembros.

Conviene recordar en este sentido algunas afirmaciones realizadas en el V Congreso Confederal de CC.OO. Antonio Gutiérrez, en el informe general, decía: «Sin aumentar la presión de la CES sobre los gobiernos no podremos ganar la batalla sobre las reivindicaciones fundamentales de los trabajadores y el propio perfil de la unidad europea en construcción, que debe ser, a la vez, económica, monetaria y social. Esto será posible si la representatividad para negociar reconocida a la nueva dirección de la CES se emplea, al mismo tiempo, para organizar las estructuras sindicales que canalicen la participación consciente de los trabajadores en cada espacio negociador, sin con ello implementamos la solidaridad y unimos la fuerza de todo el movimiento sindical europeo en una presión cada vez más amplia y contundente».

Cuando es tan patente como ahora, con la convergencia europea diseñada por el gran capital, que éste actúa con objetivos comunes por encima de las fronteras nacionales, las organizaciones de clase de los trabajadores deben hacer todos los esfuerzos para conjuntar la defensa de sus intereses en la práctica, en la acción, y no sólo en los discursos y declaraciones.

O sirven para esto, y creo que hay que impulsar que así sea desde el interior de los sindicatos, o ¿para qué si no? Quizás se reafirma el papel de las burocracias sindicales más interesadas en mantener «per se» ciertos marcos de negociación y de presencia y reconocimiento oficial, o el conformarse con la elaboración teórica de «otra forma» de construir Europa sin cuestionar el carácter de clase de esa construcción, o ambas cosas a la vez. O quizás, por esto mismo, no hay todavía ninguna perspectiva de coordinación y unidad de acción entre los trabajadores europeos, golpeados por una misma línea de actuación capitalista aplicada por los respectivos gobiernos.

En todo caso, es un debate que adquiere cada vez más actualidad e importancia a desarrollar en el movimiento sindical. No es un problema de «relaciones internacionales» entre sindicatos, sino de unidad y capacidad de la clase obrera frente a un capital y una derecha en abierta ofensiva y de la utilidad y el papel que deben desempeñar los sindicatos.

LUCILA ARAGÓ

Hay que adecuar el sindicato al modelo productivo

Es un hecho que las relaciones de producción han cambiado notablemente en los últimos años y muy especialmente desde que el Gobierno PSOE, con la colaboración de UGT, implantó la flexibilidad laboral en materia de contratación.

Sin embargo, es también evidente que las esctructuras sindicales no han variado en la misma medida y, por tanto, se puede afirmar que en estos momentos la afiliación no se corresponde en absoluto con la realidad de la clase obrera en activo, tanto en lo que se refiere a la edad como a los modelos de contratación.

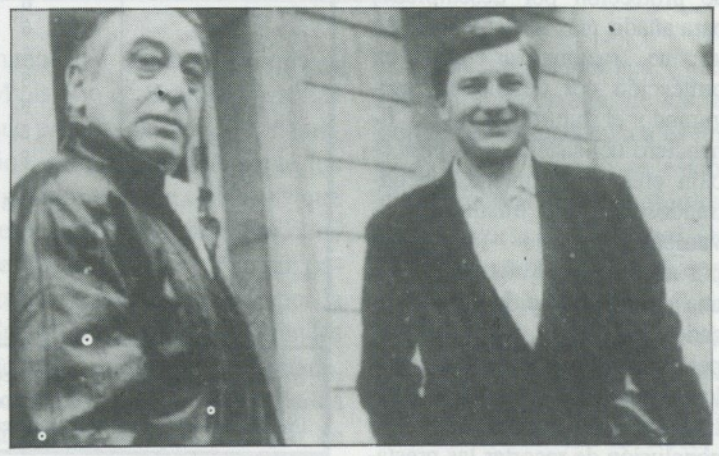
Según las últimas encuestas, el 35,68% de la contratación es eventual, lo que significa que 4.399.100 trabajadores están sujetos a contratos de menos de tres años. Sin embargo, según la encuesta realizada entre los delegados asistentes al V Congreso de CCOO de Madrid Región, sólo el 3% de los mismos tenía contrato eventual. Paradójicamente, el número de delegados pensionistas era casi el doble, exactamente el 5,2%, y el número de delegados en paro era casi exactamente igual, un 2,8%. Esto en cuanto a porcentajes, porque en cifras absolutas los 10 delegados al Congreso de CCOO de Madrid sujetos a contratación eventual, de un total de 328 delegados, hacen mucho más evidente el desfase existente en las estructuras de dirección y afiliación del sindicato con la realidad de la clase obrera en los puestos de trabajo.

Hay muchos factores que influyen en la poca afiliación de los eventuales a los sindicatos de clase; sin duda la propia represión patronal es uno de los más evidentes, dado que la afiliación a los sindicatos es considerado como un inconveniente importante para la posible renovación de los contratos eventuales. Pero precisamente por eso los sindicatos son los primeros que han de defender, con eficacia, los intereses de los eventuales para lograr una afiliación significativa de éstos.

Así mismo, valorando el porcentaje de delegados jóvenes a este Congreso de CCOO de Madrid, tenemos que menores de 25 años sólo había cinco delegados de un total de 328, lo que representa un 1,52%, y si ampliamos el margen de edad hasta los menores de 35 años, resulta que sólo llegan al 20% o, lo que es lo mismo, el porcentaje de delegados mayores de 35 años significaba el 80%. Estos datos demuestran a las claras que los niveles de dirección del sindicato están envejeciendo a marchas forzadas, lo que, sin lugar a dudas, es malo para una organización que se presupone progresista y hasta revolucionaria. Pero es que, además, estos niveles de edad en los sindicatos ya no se corresponden con la estructura de edad entre la clase obrera en activo, que se ha renovado, con la incorporación de jóvenes al proceso productivo, que por lo general son los más explotados en los puestos de trabajo.

Es pues evidente que los sindicatos deben cambiar mucho y pronto su forma de hacer sindicalismo, pues, si nos atenemos a los datos reflejados en el Congreso de CCOO de Madrid Región, se puede afirmar que CCOO está **de espaldas** a los jóvenes y a los sectores más perjudicados de la clase obrera; esto es, a los contratados en precario. Mientras tanto, las «famosas» secretarías de la juventud no son más que un apéndice inútil del sindicato que para lo único que sirven es para silenciar un gravísimo problema de marginación real de los jóvenes en el sindicato.

PABLO MAYORAL



El «Decretazo»

EL POMPOSAMENTE denominado Real Decreto de Medidas Urgentes sobre el Fomento del Empleo y Protección por Desempleo, más conocido por el «Decretazo», es una más de las leyes antiobreras del Gobierno que, unida a las ya existentes en materia de contratación laboral, a la Ley de Huelga recientemente aprobada por el Consejo de Ministros y a las que emanen del Plan de Convergencia, conforman todo un paquete legislativo que, junto a otras medidas de carácter económico, responden a las necesidades e intereses de la burguesía capitalista en España, en el marco del proyecto capitalista de «construcción» y «convergencia» europea, de ahí que las referencias a «otro modelo» de «convergencia europea», dentro del sistema, haciendo abstracción de su carácter de clase, carezca, cuando menos, de una mínima seriedad y coherencia desde una posición consecuentemente de izquierdas.

Por otra parte, la argumentación según la cual el «Decretazo» no tiene nada que ver con la integración europea y que en Europa no existe ningún recorte en las prestaciones de igual naturaleza, además de embellecer a la Europa capitalista y a sus gobiernos, carece del más elemental análisis sobre las distintas situaciones económicas de los países, de las tasas de desempleo, etcétera, y consecuentemente de las «necesidades» de sus respectivas burguesías capitalistas en el marco de la competitividad y la «convergencia» europea.

Referiéndonos al «Decretazo» y al análisis de sus consecuencias para los trabajadores, habría que empezar por destacar la amplia extensión de la «exposición de motivos» en relación con el texto completo del Decreto-ley (comprensible, por otra parte, cuando se trata de argumentar lo injustificable). El 30% del texto (incluidas las Disposiciones Adicionales, Transitorias, Derogatorias y Finales) lo ocupa dicha exposición, que no tiene desperdicio y que destila cinismo y desfachatez a raudales. Destacaremos algunas de sus «perlas». Comienza señalándonos «... una difícil situación en el mercado de trabajo y un preocupante desequilibrio financiero en el sistema de protección por desempleo», para añadir más adelante que «se impone... racionalizar el gasto en protección por desempleo, asegurando el futuro equilibrio financiero del sistema y la protección efectiva a quienes encontrándose en paro **busquen activamente trabajo**» (subrayado por nosotros). Ahí es nada, ante una «difícil situación en el mercado de trabajo», de la que los perjudicados son, evidentemente, los trabajadores, la lógica capitalista del Gobierno le lleva a la conclusión de recortar las prestaciones por desempleo a los trabajadores, que ya sufren las consecuencias de dicha «difícil situación», y recorta las prestaciones para «asegurar la protección efectiva» a quienes (¡ahí va la guinda!) encontrándose en paro buscan «activamente trabajo»; es decir, que según el Gobierno, los trabajadores en paro no buscan «activamente» trabajo, al parecer, ni siquiera los más de un millón que no perciben prestación por desempleo; y vuelve a reincidir en la misma consideración cuando, al referirse al recorte de la cuantía de las prestaciones por desempleo, sugiere que las anteriores cuantías (con la legislación anterior) «pueden desincentivar la búsqueda de empleo», o cuando acusa a los trabajadores en paro, en otro apartado, de «instalarse» de «forma insolidaria» en la protección por desempleo. El colmo del cinismo se manifiesta cuando hace referencia a lo que considera como «las causas que han originado un importante incremento en el coste de la protección» por desempleo, y cita especialmente la contratación temporal y sus elevados índices de rotación; es decir, que el causante de las causas las utiliza como argumento para decretar medidas que empeoran aún más las condiciones de vida de aquellos que sufren las consecuencias de las mismas. Y para «solucionar» el problema de lo que considera como causa; es decir, el de la contratación temporal, modifica la duración mínima del Contrato Temporal de Fomento del Empleo, que afecta tan sólo al 21% del total de la contratación, pasando ésta de seis meses a un año, aunque, eso sí, aclarando,

para que no haya duda alguna, que «sin que ello implique introducir **riguideces** (¡faltaría más!) en el mercado de trabajo, si se tiene en cuenta la **permanencia de las restantes modalidades contractuales de duración determinada** que permiten **satisfacer** adecuadamente **las necesidades** (de la patronal, se sobreentiende) existentes en el mercado de trabajo» (subrayados y frases entre paréntesis, nuestras). Sin comentarios.

El recorte de las prestaciones por desempleo afecta, fundamentalmente, a los trabajadores más explotados, a los que, cuando tienen trabajo, mayor riqueza generan y más aportan al PIB, a los más desprotegidos; es decir, a los trabajadores eventuales, a los contratados en precario, entre los que destacan los jóvenes y las mujeres (dándose en las jóvenes mujeres la doble condición). Esto no significa, ni mucho menos, que los trabajadores «fijos» puedan considerarse «a salvo» de esta medida, dada la tendencia a una mayor precarización del empleo, para la que el Gobierno prepara medidas como la suspensión de consulta previa con los representantes de los trabajadores en las declaraciones de expedientes de crisis y de regulación de empleo en las empresas, y ante las presiones de la patronal, a las que el Gobierno es muy «sensible», exigiendo, como ha hecho recientemente el Círculo de Empresarios, medidas que abaraten aún más el despido.

Repercusiones concretas del «decretazo»

1. Se amplía el período mínimo de cotización para tener derecho a las prestaciones por desempleo de seis meses a un año.

2. Se reduce de la mitad a un tercio del período cotizado el tiempo de percepción de las prestaciones. Se reduce la cuantía de las prestaciones. [*Ver cuadro.*]

3. Cuando el trabajador opte por reanudar una prestación anterior que le sea más favorable tras un nuevo período de cotización, este nuevo período no podrá computarse para el reconocimiento de un derecho posterior; es decir, que se acumularán períodos de cotización que no se tendrán en cuenta para el reconocimiento de un futuro derecho a prestación por desempleo.

4. Las prestaciones que se perciban por expedientes de crisis o de regulación de empleo, tanto por reducción de jornada como por suspensión temporal de contratos inferior a seis meses, en caso de que dichos expedientes culminen en extinción definitiva de la relación laboral por resolución administrativa, serán descontadas de las prestaciones posteriores (con la legislación anterior no se descontaban si entre la reducción de jornada o suspensión temporal de contratos por tiempo inferior a seis meses no mediaba un período superior a un año desde la finalización de tal reducción de jornada de suspensión temporal de contratos).

5. La reducción del tiempo de percepción de prestación por desempleo repercute sobre la acumulación del período mínimo de cotización exigible para generar derecho a pensiones de la Seguridad Social. (Ejemplo: si en un período de dos años un trabajador trabajaba doce meses y percibía prestaciones por desempleo durante seis, acumulaba un período de cotizaciones de dieciocho meses; con el «Decretazo», en el mismo período de dos años y trabajando los mismos doce meses, al percibir sólo cuatro de prestaciones, acumula dieciséis en lugar de [illegible] acumulaba con aplicación del sistema anterior.)

6. La negativa a aceptar una «colocación adecuada» supondrá la supresión de las prestaciones a tales efectos. En el «Decretazo» se establece que «... se entenderá por colocación adecuada ... cualquier otra que, ajustándose a sus aptitudes físicas y formativas ... y no suponga cambio de su residencia habitual, salvo que tenga posibilidad de alojamiento apropiado en el lugar de nuevo empleo».

El brutal atentado que para los trabajadores supone el «Decretazo» exige el apoyo de todas las fuerzas de la izquierda a las movilizaciones convocadas por los sindicatos, así como el máximo esfuerzo de todos sus militantes para lograr la más amplia participación de los trabajadores, en particular en la huelga del 28 de mayo.

El objetivo ha de ser el de forzar la retirada del decreto aprobado por el Gobierno y convalidado por el Parlamento, lo que demuestra, una vez más, qué intereses representan ambos, no el de forzar su negociación, porque ¿acaso hay algo negociable en el «Decretazo»?, plantear la posibilidad de negociación, en este caso supone aceptar la posibilidad de que la anterior legislación sobre prestaciones por desempleo, profundamente injusta, con la que más de un millón de trabajadores en paro no perciben prestación alguna, pueda modificarse, ya que modificarla supondría recortarla, y no es de recibo hacer del alcance de los recortes objeto de negociación. •

FRANCISCO RUIZ

CON LA LEGISLACION ANTERIOR			CON EL «DECRETAZO»	
Periodo cotizado (en meses)	Tiempo de prestaciones (en meses)	Cuantia (% S/la Base reguladora	Tiempo de prestaciones (en meses)	Cuantia (% S/LA) Base regladora
6	3	80	0	0
12	6	80	4	70
18	6	80	6	70
	3	70		
24	6	80	6	70
	6	70	2	60
30	6	80	6	70
	6	70	4	60
	3	60		
36	6	80	6	70
	6	70	6	60
	6	60		
42	6	80	6	70
	6	70	8	60
	9	60		
48	6	80	6	70
	6	70	10	60
	12	60		

(NOTA: El Gobierno, en el «Decretazo», debajo del cuadro en el que se indican las escalas de período de cotización y período de prestaciones, amenaza con que «esta escala podrá ser modificada por el Gobierno, previo informe al Consejo General del INEM, en función de la tasa de desempleo y de las posibilidades de su régimen de financiación».)

ÁNGELES MAESTRO: «*El gasto sanitario público se mantiene igual desde 1982, y ahora se quiere reducir*»

ÁNGELES MAESTRO es diputada por Izquierda Unida en el Parlamento, en la Comisión de Sanidad. Es médico especialista en salud pública. Desde 1979 hasta 1988 fue concejala en el Ayuntamiento de Talavera (Toledo), ocupándose también allí del área de salud.

En el último congreso del PCE fue elegida para el Comité Central Federal, siendo la más votada después de Julio Anguita.

Texto: ROSA GARCÍA

Fotos: PAULSIDES

Ángeles Maestro

VANGUARDIA OBRERA. Hablar de sanidad pública hoy es hablar necesariamente de los planes de privatización del Ministerio de Sanidad, y del Informe Abril Martorell...

ANGELES MAESTRO. El Informe Abril Martorell es fundamentalmente una estrategia de la industria farmacéutica, de las clínicas privadas y de los colegios profesionales. Tenemos noticias de que en el año 1987 el exministro Sánchez de León reunió a todas estas entidades y se decidió crear una fundación, con dinero común, destinada a potenciar el debate entre lo privado y lo público en los medios de comunicación y a desprestigiar la sanidad pública. Curiosamente en el Congreso de los Diputados el grupo heredero de la UCD, el CDS, es el que plantea la creación de la famosa comisión Abril Martorell. Lo que cambia es el padrinazgo: ahora es el PSOE quien lo realiza. Las conclusiones del informe Abril Martorell eran conocidas y apoyadas por el Ministerio antes de ser públicas, el propio Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud propone a sus nueve miembros, de los cuales siete tienen intereses en la sanidad privada: percibiendo dinero de clínicas privadas, asesorando aseguradoras privadas etc.

V.O. En este informe se apuesta claramente por la privatización, por la reducción del gasto y se hace un ataque a las mínimas conquistas obtenidas hasta ahora, como por ejemplo la gratuidad de los medicamentos para los jubilados, lo que provocó una fuerte repulsa fuerte.

A. M. : Claro, porque es el informe de los intereses de la privatización, es un informe que técnicamente no se tiene de pie desde el punto de vista de la sanidad pública. En él la sanidad pública, la medicina preventiva, la planificación sanitaria no existe. El eje fundamental del discurso es que se gasta mucho dinero público en sanidad y que hay que pagar más por parte de los bolsillos privados, el gasto público de alguna manera es un gasto solidario, proviene de los impuestos de todos y se reparte, es decir, la sanidad pública no es gratuita, no se paga en el momento en que se usa, se paga a través de los impuestos que en este país seguimos pagando fundamentalmente los asalariados. En ese sentido el informe Abrill Martorell se corresponde y coincide con el Ministerio de Economía y Hacienda, con la política económica del gobierno. Que los intereses privados tuvieran su vía de presión, contábamos con ello, ahora bien que eso concidiera exactamente con la política económica del gobierno suponía que se iba a llevar a cabo. De hecho el informe más importante desde el punto de vista del contenido económico que se llamaba Escenario de Gasto lo realizaron funcionarios del Ministerio de Economía y Hacienda en su horario de trabajo directamente desde el Ministerio de Economía y Hacienda. La amenaza más seria de levarlo a cabo fue cuando García Valverde intentó trasladar el sistema sanitario del Derecho publico al Derecho privado a través de la Ley de Presupuestos Generales del Estado del año pasado, esto suponía eliminar el concurso público a las plazas, enturbiar la transparencia y el control de los sindicatos sobre el gasto. No se logró pero ese es el gran objetivo: regularlos por el mismo régimen jurídico administrativo por el que se rige una empresa privada.

«El 40 por 100 de los medicamentos no sirven para nada».

Nosotros pensamos que hay que plantar cara a todo esto y si hoy nadie habla del informe Abril Martorell es porque las organizaciones sociales se opusieron. Yo creo que no debemos minusvalorar nuestras fuerzas, la fuerza de la gente que tenemos intereses claros en una sanidad publica de calidad, es decir que la gente tiene que si se lucha las cosas se ganan.

V.O. En otros países europeos también se está hablando de reducir el gasto de sanidad, e incluso algunos de los planteamientos coinciden con el informe.

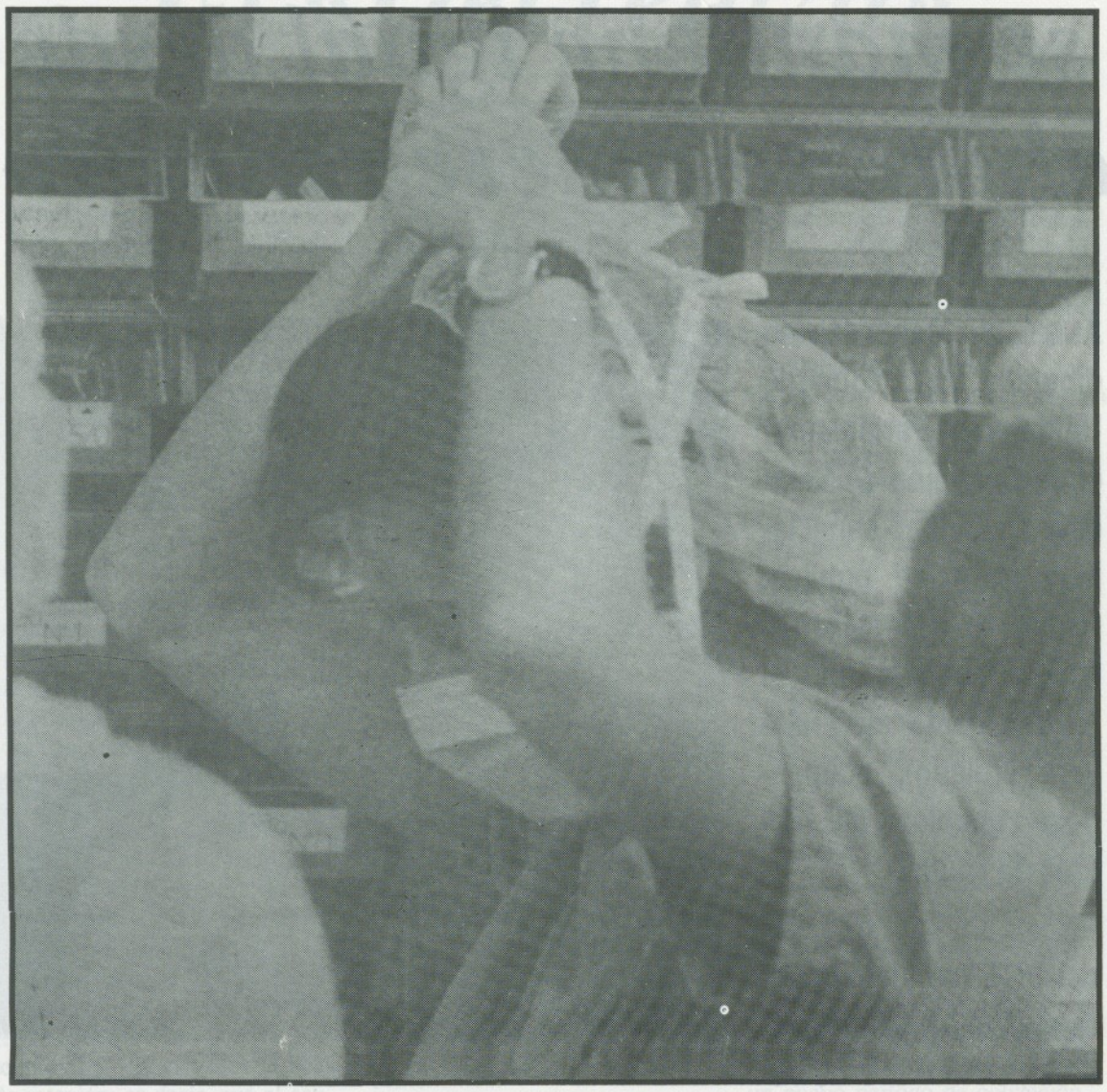
A. M. En Italia intentaron poner tasas, es decir pagar cantidades por las consultas, o por las urgencias –como sugiere también el informe Abril Martorell– y hubo una huelga general, que por cierto coincidió con nuestro 14-D, y se impidió. Algo parecido sucedió en Inglaterra. En este momento el Ministerio de Sanidad está intentando hacer lo mismo, el hacer un llamado plan de empresa, que el Ministerio de Sanidad no sea el que provea los servicios sanitarios, sino que simplemente los «garantice», sin señalar que sean públicos o privados. Los servicios sanitarios fueron pagados fundamentalmente por la Seguridad Social, los grandes hospitales no son del Estado, son de los trabajadores y de los empresarios, vía cotización de la Seguridad Social, es decir es un patrimonio del cual el Estado no puede disponer alegremente. Nosotros por eso creamos la Plataforma de Defensa del Sistema Sanitario Público.

V.O. Se ha dicho que en la dimisión de García Valverde como ministro además del caso de los terrenos de Renfe tuvieron que ver la presión de la industria farmacéutica y la aprobación de la Ley del Medicamento, ¿qué opinas?

A. M. La dimisión de García Valverde tiene que ver con una gestión malísima por su parte, llegó diciendo que la sanidad se solucionaba igual que se solucionó lo de Sagunto y lo de RENFE, y esa fue su tónica.

La fuerza económica, y como grupo de presión de los laboratorios farmacéuticos es impresionante. Cuando se estaba discutiendo la Ley del Medicamento en el Congreso (en 1990), repasando documentos observé que más de un 25% del precio de los medicamentos se destina a su promoción y propaganda, que curiosamente se destina sólo a los médicos, a quienes les pagan todos los →

«El gasto sanitario público se mantiene igual desde 1982,



«En España hay tres camas por 1.000 habitante, mientras en Europa hay siete u ocho».

→ congresos que se hacen en este país, es decir que el nivel de dependencia de los laboratorios es enorme, y por supuesto que este poder económico les permite quitar y poner ministros.

V.O. Se sabe que hay muchos medicamentos con la misma composición pero con distinto nombre y precio. Hay una fuerte demanda de recetas por parte de la sociedad, y la medicina que se practica en los consultorios va en esa línea...

A.M. A nivel de investigación se realiza la que los laboratorios quieren, porque son los que están financiando todas las investigaciones que se hacen, en sanidad pública y privada. De hecho el FIS (Fondo de Investigación Social), tiene superávit, normalmente se destina poquísimo dinero para investigación y sin embargo sobra.

Además los productos farmacéuticos no son un mercado normal y corriente donde la gente «decide» lo que compra. Es inaudito que se intente culpabilizar a la población del consumo de medicamentos, o decir que los pensionistas consumen medicamentos a mansalva. Claro que un sistema sanitario masificado como el que tenemos en la actualidad, cuando la media en Madrid de consulta de Medicina General es de tres minutos por persona, hace que los médicos se vean, a veces, obligados a «tirar de recetario», pero la población no es la que decide lo que le recetan, aunque sí hay una presión de la gente en ese sentido. Creo que en esto tiene mucha responsabilidad el Estado, al permitir la publicidad en TV de medicamentos, con lo que se nos hace llegar un mensaje de dependencia entre medicamento y felicidad; entre medicamento y salud, y no se apuesta por una mayor cultura de salud natural.

Se amenaza con un Real Decreto que eliminaría de las recetas de la Seguridad Social los analgésicos, los laxantes o los polivitamínicos, nosotros estamos absolutamente en contra de una eliminación arbitraria de estos medicamentos. Una forma real de eliminar costos sería que la Seguridad Social comprara globalmente los medicamentos, sin marcas, ya que es el mayor comprador mayoritario de productos farmacéuticos y quien debe decidir cómo se beneficia de los precios y estimularlos a la baja los precios.

V.O. El precio de los medicamentos no ha dejado de subir, a pesar de que se supone que están bajo control administrativo, al igual que el gasto público en farmacia.

A.M. El precio de los medicamentos se está manipulando vía registro, debido a que está controlado por la Administración, los laboratorios lo que hacen es variar el color de las pastillas e inscribirlas con otro nombre y con el precio multiplicado. Se desestimó una propuesta de IU que prohibía registrar medicamentos que no fueran de diferentes composición.

La industria farmacéutica es el sector económico que más ha crecido en España desde 1975, está absolutamente colonizada por las multinacionales farmacéuticas, que utilizan sus cauces internos entre las filiales y las empresas madres para hacer trasvases de recursos económicos. Los pocos laboratorios de capital español que existían están cerrando, con lo que la dependencia es grandísima, ya que aquí se hace poco más que embasar los medicamentos.

V.O. Se da la paradoja de que se habla de reducir las prestaciones de la sanidad pública, cuando éstas ya son de por sí insuficientes, en muchísimos temas: prevención, salud buco-dental, laboral, mental.

A.M. Nosotros apostamos decididamente por una sanidad pública de calidad, y con control público, es decir con participación de la población, y ello implica que se aborde integralmente la medicina preventiva, la asistencia y la rehabilitación, no solamente física sino mental y social. Este planteamiento es el único que sirve para tratar las enfermedades más comunes hoy. Por ejemplo las enfermedades cardiovasculares y el cáncer, no tienen cura, el tratamiento es costosísimo y pocas veces prolonga la cantidad de vida de las personas, y desde luego la calidad aún menos, lo que actúa eficazmente es la medicina preventiva. Se conocen los llamados factores de riesgo, qué edades, qué situaciones, qué alimentación ponen más en riesgo a unas personas que a otras de padecer ciertas enfermedades, por lo tanto es posible hacer programas de prevención. Es curioso que ninguna de las aseguradoras privadas quiere hacerse cargo del tema de la prevención. La prevención no es rentable a corto plazo, pero para la sanidad pública es una forma también de ahorrar en el gasto a medio plazo.

Hay una gran deuda histórica de la sanidad pública con la población española, tenemos cifras muy inferiores de gasto destinado a sanidad. Los países europeos llevan más de 40 años invirtiendo en este terreno, lo que supone que tengan un patrimonio importantísimo, cuando en estos países se habla de reducir gastos, se parte de unos niveles altísimos, en cambio en España se parte de niveles muy bajos, yo comentaba que era como hacer una dieta de adelgazamiento a una persona desnutrida, se nos puede morir. Hay que gastar más en sanidad, el gasto sanitario público es igual desde 1982, y se puede aumentar haciendo una reforma fiscal.

Con respecto a las mujeres, la primera causa de muerte que es el cáncer de mama, no se está haciendo nada para la detección precoz, que además de una educación sanitaria exige el hacer una mamografía cada dos años a las mujeres mayores de 35 años. En Suecia que sí se hace esta prevención ha disminuido la mortalidad en un 40%. Algo parecido pasa con las citologías y los cánceres de cuello uterino.

Otro tema es el de la salud buco-dental, la Encuesta Nacional de Salud decía que el 90% de los escolares tienen caries, y no hay servicios públicos que atiendan esta prestación. Otro gran capítulo es la salud mental, todos estábamos de acuerdo que se cerraran los manicomios que eran depósitos indecentes donde se tenían almacenados a los enfermos mentales, pero no se ha creado otros métodos de atención. La salud laboral, los accidentes de trabajo, las enfermedades laborales, son otro de los problemas no abordados por la autoridad pública. Dentro del INSALUD hay sólo seis especialistas en salud laboral para toda España, algo parecido ocurre con la geriatría y sin embargo existen tan sólo siete unidades de Geriatría acreditadas para la docencia.

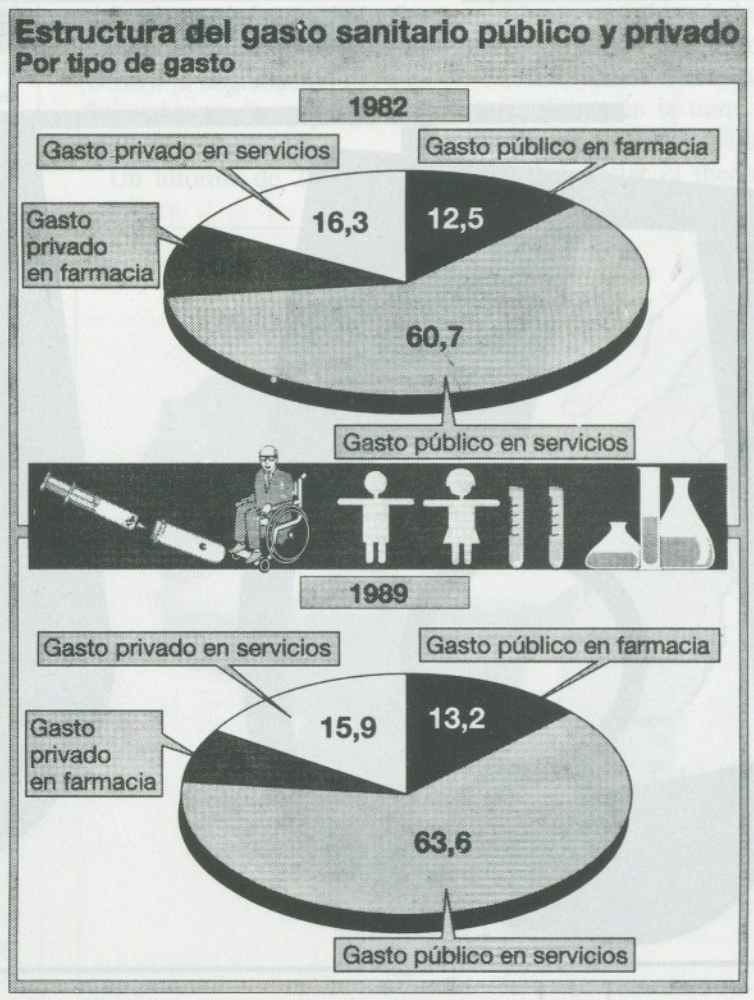
V.O. En los últimos días ha salido a la palestra el elevado número de personas en lista de espera, más de 140.000, el Ministerio plantea que la solución es la sanidad privada, cuando todo el mundo sabe que es la sanidad pública quien tiene mayores y mejores medios.

A. M. Las listas de espera que hay en estos momentos son el reflejo más evidente de que tenemos un sistema sanitario insuficiente. Claro, que se han hecho medidas demagógicas. Desde 1982 hasta ahora hay siete millones que tienen derecho a ser asistidos por la Seguridad Social, y sin embargo no se han ampliado los servicios.

V.O. En el programa de la Plataforma por la Defensa de

, y ahora se quiere reducir»...

Ángeles Maestro.



«Con la Ley del Medicamento se preveía introducir que los centros de salud sirvieran las medicinas, pero la presión de los laboratorios lo impidió».

la Salud Pública se hablaba de promover un control positivo sobre los médicos, esto llama la atención teniendo en cuenta que es un sector especialmente suspicaz en lo referente al control.

A.M. A mí no me gusta hablar de «clase médica», porque creo que es un sector socialmente heterogéno. Lo más conocido son los Colegios de Médicos, que representan a un sector muy reaccionario, el nivel de participación de los médicos en las elecciones de estos Colegios es tan sólo un 13%, sin embargo existe la colegiación obligatoria, mantenida por el Gobierno PSOE, lo que le da a estos sectores, básicamente reaccionarios, un gran poder.

Lo que es cierto es que si los médicos que están en la sanidad pública tienen intereses en la sanidad privada están haciendo todo lo posible para que lo público funcione mal para que aumente la demanda de lo privado. Un elevado porcentaje de los médicos cobran la dedicación exclusiva y están prestando servicio en la sanidad privada, incumpliendo flagrantemente la Ley de Incompatibilidades y la Administración está consintiéndolo. Son precisamente los jefes de servicios, quienes marcan el ritmo de productividad, los que más intereses tienen en la sanidad privada.

Es más vergonzoso todavía que el Ministerio hable de medidas de gestión, de control de gasto, de reducción de prestaciones para ahorrar, cuando una manera de hacerlo y de mejorar la asistencia pública es aplicar la Ley de Incompatibilidades al personal sanitario. Las medidas que pretende introducir el Ministerio da más poder a los gerentes.

V.O. El Ministerio habla de incentivar la productividad en los jefes de departamento, a través de gratificaciones económicas y de reducción de los costes por proceso, ¿qué va a significar esto?

A.M. En el medio sanitario se realiza lo que se conoce como «peonadas», esto es: para reducir las listas de espera, el Ministerio propuso a los trabajadores de un servicio que trabajen por la tarde, en el mismo o en otro hospital, con un sobresueldo importante, que llega a las 40.000 ptas. diarias a los médicos, ¿qué ha sucedido?, que se han reducido el número de operaciones que se realizaban por la mañana.

Los profesionales de la sanidad tienen que estar bien pagados, pero ha de realizarse un adecuado control de su trabajo y su dedicación, no se puede poner la zanahoria de un sueldo para aumentar la productividad que lo que hace es redundar en detrimento de un adecuado ejercicio de la profesión.

El pago por proceso que se quiere introducir es algo peligroso, porque no se valora el proceso con todas las posibles complicaciones dependiendo de la persona, sino el proceso/estandar. ¿Qué ha sucedido en EE.UU. donde se viene ejerciendo este tipo de asistencia sanitaria?, que los hospitales no acogen a los enfermos crónicos, ancianos o de alto riesgo. •

También contamos con Angeles Maestro en una charla–coloquio que se realizó el jueves 7 de mayo en el «Rincón del Arte Nuevo», sobre el tema «Mujer y Salud» y en el que, aparte de lo explicado en esta entrevista, se profundizó en las carencias de la sanidad pública respecto a la salud de las mujeres: prevención del cáncer de mama, tratamiento de la menopausia, prevención de embarazo precoz, tratamiento de enfermedades mentales tales como depresión y estrés, etcétera, y otros. La charla fue amena y muy didáctica. Y se resaltó la necesidad de realizar la lucha por la consecución de una sanidad pública.

Tema pendiente: El derecho al aborto, libre y gratuito

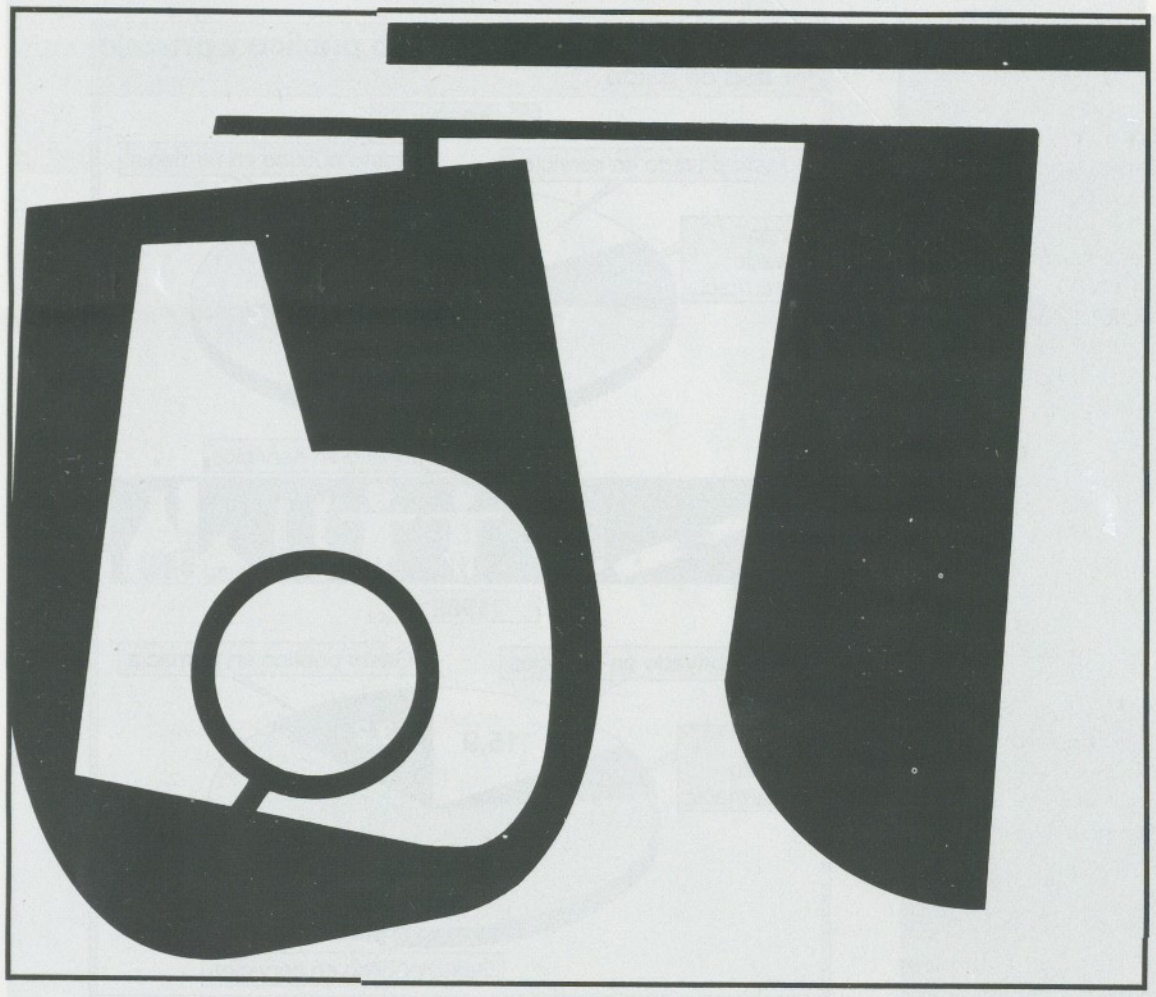
El tema del aborto tiene que ver con la planificación familiar y los embarazos no deseados, es muy importante decir que ninguna mujer aborta porque sí, por lo que merece el máximo respeto y la máxima protección. Hay otros métodos que deben ponerse en marcha por parte de la sanidad pública para reducir el número de abortos. Yo creo que el aborto como decisión propia debe retirarse del Código Penal.

Han cerrado centros de planificación familiar diciendo que pasaba a la sanidad pública y esto no es cierto. Las ligaduras de trompas y las vasectomías tienen dificultades enormes en la sanidad pública, he sabido de un centro en el que se le decía a los pacientes que había una lista de espera de dos y tres años cuando no existían tales listas.

En este tema se está retrocediendo; el ministro hablaba en concertarlo con la sanidad privada. Se dan casos de médicos que objetan en la sanidad pública pero no en la sanidad privada. La Administración debe garantizar en todas las áreas sanitarias que se ejerce este derecho y no cubrir las plazas con médicos que objetan y van a dificultar el proceso. •

Progreso y desarrollo humano

Se ha presentado recientemente el informe sobre desarrollo humano 1992 realizado por el PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo). Dicho programa se basa en una serie de tablas sobre diversos índices de los diferentes países, desde el PIB, hasta los niveles de albabetización, consumo y poder adquisitivo, sectores de pobreza, esperanza de vida... de los cuales hallando una media, se establece una especie de ranking de países según su desarrollo. Aún cuando muchos aspectos de tal informe sean cuestionables, los datos son significativos y de interés su análisis. En primer lugar, se señala un descenso generalizado y global en el índice medio de desarrollo humano, en comparación con los dos años anteriores en que se han publicado los informes sobre el desarrollo humano. Este dato adquiere más importancia si se tiene en cuenta los entresijos de las diversas tablas, que denotan el aumento de sectores empobrecidos en los países desarrollados, el descenso de crecimiento en los gastos sociales, así como la diferenciación entre países desarrollados y subdesarrollados.



«Garegille», 1986. Autor: Ruiz de Eguino.

Algunos rasgos, sobre estado y desarrollo

«Sin embargo, debido a estos nuevos gastos (educación, bienestar y seguridad social, etc.) a estos nuevos ingresos (impuestos sobre la renta, exenciones del mínimo de existencia, impuestos sobre el capital y sobre la propiedad) y debido a las transformaciones de los viejos, se difunde entre las masas la idea de que el gobierno quiere y puede asegurar el bienestar general, pasando por encima de los intereses unilaterales de la burguesía, lo cual encierra una gran expectación» (Puvianai, *Teoría de la ilusión financiera*, 1903).

El capitalismo actual se encuentra fortalecido y a la vez en crisis. Crisis desigual, compleja y contradictoria, cuyos efectos no son definitivos, están sujetos a cambios y en muchos aspectos falta aún discernirlos y desarrollarlos.

El Estado del bienestar–Estado benefactor, como redistribuidor de una serie de beneficios sociales entre algunos sectores poblacionales de los países capitalistas desarrollados, parece acabado en su concepción clásica o como se conocía hasta ahora. Junto a la internacionalización de la economía y la limitación del papel del Estado en algunos sectores, aparece como contradictorio el hecho señalado en el informe de que el 83% de los países más industrializados, aplica políticas más proteccionistas que hace diez años. Aun cuando pueda ser un dato genérico, si no se analiza más en profundidad, sí que sitúa aspectos que hasta no hace mucho, pudieran parecer opuestos. Los organismos internacionales que marcan los intereses de la concentración internacional del capital y que sitúan de forma general las políticas económicas, sitúan el papel del Estado en una nueva situación, que se puede denominar de interrelación: el Estado (nacional o supranacional) es aún un conjunto de instituciones estratégicas necesarias para diversos aspectos de la regulación del mercado, para la reproducción de la fuerza del trabajo, para la gestión de los conflictos sociales y de la articualación sociopolítica necesaria, para las diversas realidades económicas. En este último aspecto, el Estado adquiere un papel importante y decisivo.

El Estado, como catalizador y limitador de la sociedad

Una de las cuestiones significativas del informe es la eliminación del índice de libertad política de las tablas de análisis. Algunos aspectos en cuanto a libertades, incluidos en algunos otros análisis parciales, señalan claramente la limitación de estos y en general la crisis de los actuales sistemas representativos. Aumentan los aspectos policiales y militares frente a otros como la educación o la sanidad, descienden los índices de participación y aumentan los índices de población marginal o por ejemplo, la población carcelaria. Algunos de estos aspectos vienen a señalar el fin o la crisis de los sistemas de articulación de las clases y sectores base de los estados del bienestar. Frente a ello, y a un diferente papel en el marco económico, el Estado aumenta su papel limitador de la sociedad, ante las dificultades para lograr una articulación lo suficientemente amplia como modelo de representación de determinados sectores sociales. Esto provoca un vacío relativo, ante la ausencia de alternativas, al modelo social actualmente existente, donde se sitúan buena parte de los rebrotes del fascismo, así como diversas realidades de muy diferentes características, situadas generalmente por los analistas, en el contexto de fenómenos antisistema.

Aún así, no se puede determinar como acabadas ni definitivas estas situaciones. El capitalismo, en sus diferentes cambios, situaciones y realidades, puede producir procesos de integración y representación, de diversos sectores y clases sociales, más o menos amplios.

CRECIMIENTO DEL GASTO SOCIAL REAL (1960–1985)
(porcentaje anual)

	1960–75	1975–80	1980–85
Alemania	4,8	2,0	0,7
Australia	8,1	1,9	3,9
Austria	3,5	4,8	2,9
Bélgica	n.d.	5,0	2,2
Canadá	7,6	2,0	4,0
Dinamarca	8,8	8,4	1,8
España	n.d.	n.d.	1,1
EE.UU.	6,5	2,0	2,7
Francia	7,3	5,5	3,2
Italia	5,5	3,9	2,8
Japón	8,5	8,2	3,2
Noruega	8,3	6,8	3,8
P. Bajos	6,4	4,0	2,2
Reino Unido	3,9	2,0	1,9
Suecia	5,9	3,3,	0,1
Suiza	8,1	1,4	1,8
Grecia	n.d.	7,6	8,2
Promedio OCDE	6,5	4,2	2,6

Fuente: OCDE, 1988

Desarrollo–subdesarrollo, en un nuevo marco

El tercer informe sobre desarrollo humano, señala la profundización de la diferencia Norte–Sur y su ahondamiento en la actual situación internacional. Si el reparto de la riqueza mundial se sitúa en que el 85% es llevado por los países industrializados, a pesar de lo cual, dicha población, lejos de aumentar su desarrollo, ahonda sus diferencias, con importantes sectores situados en el subdesarrollo de una u otra manera. Podríamos establecer así, por un lado, el Norte–Sur entre países desarrollados y subdesarrollados, con un particular Norte–Sur, interiorizado en cada país. Se establece así, lo que comúnmente se ha denominado (de una manera un tanto esquematizado) la sociedad de los tres tercios, con la particularidad del aumento de la diferencia del primero frente a los otros dos. Por otra parte ambas situaciones, tienen ciertas interrelaciones, las corrientes de emigración de las zonas subdesarrolladas, provoca conflictos sociales entre los sectores marginados de las sociedades occidentales, que faltos de representación y perspectivas pueden ser fácil caldo de cultivo del racismo y la xenofobia frente a la emigración del sur.

A los diversos factores que aparecen de cara a la realización del informe de desarrollo humano, se echan en falta aspectos como la calidad medioambiental, de hábitat, ocio, desarrollo personal, salud integral... que son hoy parte necesaria en el desarrollo humano, en una sociedad supuestamente avanzada.

Haciendo una valoración genérica del informe, parece claro que las mayorías sociales, impedidas de participación y control, ya no sólo en los aspectos económicos que determinan el desarrollo, tienen cada vez más limitada su participación social o política.

El desarrollo humano, los avances en el bienestar social mayoritario, está sujeto a los intereses y diferentes situaciones de una minoría, que ya no sólo condena al hambre a una buena parte de la población mundial, sino que limita, condiciona el desarrollo y divide a las propias sociedades del mundo "desarrollado".

PEDRO ANTONIO CURTO

Incineradoras

JUAN J. PALACIOS ESTEBAN*

Nadie duda que vivimos en la sociedad del despilfarro y que generamos grandes cantidades de residuos de todo tipo, nuestros gobernantes más preocupados por la plusvalía que por la calidad de vida, acogen y dan facilidades a cualquier empresa que se beneficiara del desinterés y del descontrol oficial. Prueba de ello, es que a finales de 1990, del cuestionario que Medio Ambiente envió a 120 empresas sospechosas de producir residuos tóxicos, 72 no respondieron y sólo siete reconocieron que producían este tipo de residuos. La propia Administración regional de Medio Ambiente sabe que 65.000 toneladas de residuos tóxicos (aparte de ENSIDESA y AZSA) se vierten anualmente sin ningún control a ríos y basureros y que de éstos, el 71 por ciento son altamente peligrosos y deberían estar aislados en depósitos de seguridad. Este panorama del que nuestros representantes son conscientes, bastaría para reconocer sin tapujos que el incinerador de lodos que se pretende instalar, lo será de residuos tóxicos y peligrosos, a modo de ejemplo, en agosto de 1990, la Plataforma anti-Fango de San Esteban de Pravia, hace públicos los resultados del análisis que ellos encargaron al Departamento de Química, Física y Analítica de la Universidad de Oviedo; éste dice que el fango depositado en el puerto contiene niveles de sustancias cancerígenas muy superiores a los que permite la ley; viendo esto, cabe preguntarse ¿qué no habrá en nuestros ríos?

Por otra parte, la decisión de instalar estas incineradoras es antidemocrática y está totalmente desvinculada de la opinión ciudadana, ya local, como del Principado. Sería necesario un amplio, transparente y serio debate sobre el tema, antes de tomar decisiones que pueden poner en peligro la salud de gran parte de la población, es el precio de la ridícula democracia que vivimos y que limita la participación a depositar una papeleta cada cuatro años y después si te vi no me acuerdo. ¿A quién se le podrán pedir explicaciones dentro de unos años?, ¿es ético que lo producido por unas industrias sea dispersado a toda la comunidad?

Las plantas incineradoras son una industria en sí mismas, necesitan residuos para su propia existencia y deben funcionar de forma permanente, así, cuando en su entorno no se producen suficientes residuos se importan de otros sitios generando un nuevo tipo de comercio ya en marcha, el de la «gestión de residuos»; acordémonos del asunto de los residuos del hospital de Valdecilla (Santander), aparecieron en una nave de Carbó Insa en Siero y se intentaban depositar en el vertedero de COGERSA, poco después aparecía en la prensa «la clausura del horno incinerador del hospital Marqués de Valdecilla fue provocada por las protestas de los vecinos y los propios médicos de la planta de anatomía patológica, afectados de **laringitis y faringitis granulosas originadas por gases tóxicos**, según certificó el servicio de otorrinolaringología, nadie quería estos vertidos a su lado, a pesar de que recibían el TRATAMIENTO RECOMENDADO POR LA LEY».

Además las plantas incineradoras están siendo presentadas como fuentes de energía renovable y tecnologías limpias que eliminan la necesidad de los vertederos (el PER, Plan de Energías Renovables prevé una dotación presupuestaria destinada a las incineradoras de residuos de 67.300 millones de pesetas, entre 1909-1995, lo que representa un 46 por 100 de las inversiones totales en energías renovables) y que produce electricidad; sin embargo, la producción de mínimas cantidades de energía no compensa los problemas de la incineración, simplemente se cambia el medio al que principalmente se vierte: de la tierra al aire. Por otro lado, la incineración no sólo no elimina, sino que agrava el problema de los vertederos ya que convierte la mezcla heterogénea de residuos en cenizas altamente tóxicas que tienen que ser depositadas y vigiladas en algún lugar. De sobra es conocido el veneno ambiental más tóxico que se conoce en la actualidad, *las dioxinas*, se generan en el proceso de incineración de residuos y materiales de desecho.

Hay que abandonar la línea de la gestión de residuos, puesto que mientras sigamos así, continuarán generándose más y se hará necesario ampliar o construir nuevas plantas, lo que complicaría más todavía la solución y seguiríamos hipotecando nuestra salud y la de las generaciones futuras.

El problema de los residuos no es su gestión, es su producción; hay que poner el remedio antes de la enfermedad, urge generar cada vez menos residuos y si es preciso modificar parte del sistema de producción, lo que está claro es que la construcción y gestión de instalaciones de este tipo nos conducirá inevitablemente a un futuro con más cantidad de residuos. Hay que hacer planes de reducción de la producción de residuos en origen. Hay que hacer planes de recuperación, tratamiento y reciclado. Hay que hacer campañas educacionales a productores y consumidores. Lo demás sólo es una huida hacia adelante en la que seguro que perderemos.

* *Miembro de AEDENAT-Asturies*

OMS: Un informe alarmante

CRISTIAN VIRET

Según un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la degradación del medio ambiente hace peligrar la salud del planeta.

Un informe de 270 páginas publicado el 4 de marzo pasado por la OMS plantea los efectos del medio ambiente sobre la salud de la población de la tierra. Se trata del primer análisis completo de los lazos entre salud, medio ambiente y desarrollo, que pone en primer plano la salud de los individuos. Un tema presentado por las Naciones Unidas que demuestra la justa preocupación de las organizaciones ecologistas desde muchos años al denunciar la actuación de los estados (fundamentalmente los estados capitlaistas del norte) frente a este problema.

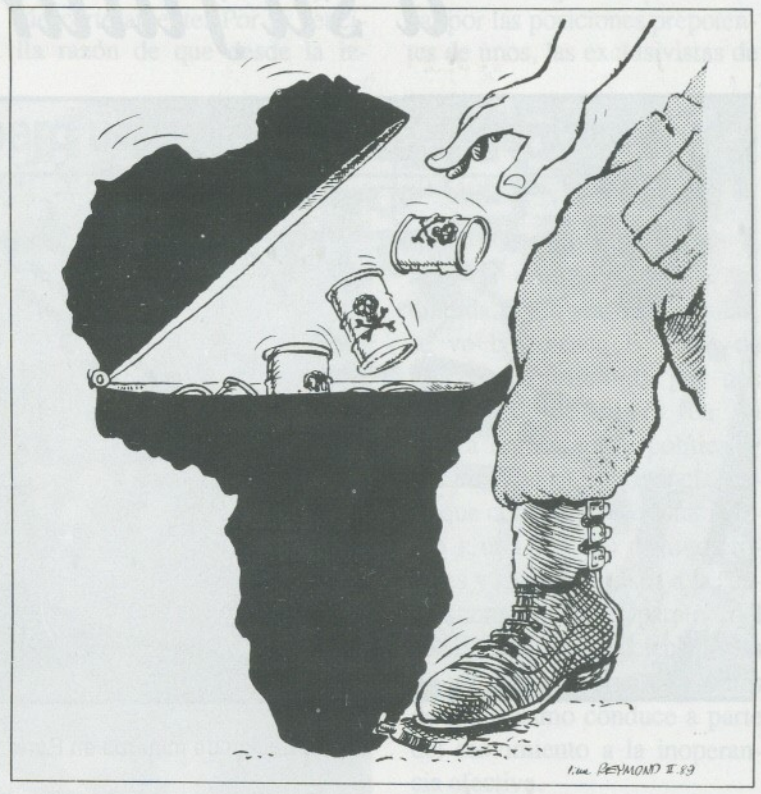


Ilustración del libro *Nuestros residuos tóxicos: África tiene hambre, aquí están nuestras basuras.*

En este estudio, se pone de relieve que las medidas parciales ya no sirven. Los enfermos se cuentan por miles de millones, los muertos por millones cada año. «Las enfermedades ligadas al medio ambiente y al modo de vida, entre ellas las enfermedades infecciosas y el cáncer, son responsables, segñún las estimaciones, del 75% de 49 millones de fallecimientos anuales. Unos 2.500 millones de personas están tocadas por afecciones asociadas a la falta o a la contaminación del abastecimiento de agua, así como a la falta de higiene.

Más de 2.000 millones de individuos viven en un medio ambiente que constituye una amenaza para su salud y su existencia». En este amplio requisitorio, el informe demuestra la urgencia del problema: «Si no actuamos ahora, la crisis que enfrentarán la tierra y sus habitantes se volverá intolerable, al no estar el medio ambiente capaz de enfrentarla». No puede estar más claro...

«Un medio ambiente mediocre favorece la transmisión de los agentes biológicos: bacterias, hongos, parásitos», constata la OMS. Pues esta proliferación de los «agentes biológicos» en el agua, los alimentos, el aire y los suelos es el problema más inmediato y la causa principal de mortalidad prematura. Las enfermedades diarréicas matan cada año a más de tres millones de niños; el 70 por 100 de estas enfermedades están directamente ligadas a productos alimenticios contaminados. Las enfermedades parasitarias tropicales -que matan a más de un millón de seres humanos y contamina otros 280 millones cada año-, «dependen directamente de las extensiones de agua donde se reproducen los insectos o moluscos vectores», añade el informe. Otra amenaza pesa sobre el agua del planeta: la que proviene de las lluvias ácidas cuando las precipitaciones sirven como fuente de agua potable.

En segundo lugar viene la proliferación de los agentes naturales físicos y químicos, «que pueden dañar la salud cuando son numerosos». En el caso de la radioactividad o de los rayos ultravioletas. Se habla del empobrecimiento de la capa de ozono acompañado de una llegada masiva de UV, y así de «un aumento del número de cáncer de la piel y de los casos de cataratas.

La tercera consecuencia de un medio ambiente deteriorado, la multiplicación de los contaminantes tales como los óxidos de nitrógeno y azufre, los hidrocarburos, el humo, los residuos químicos y nucleares, favorece el desarrollo de una cantidad de enfermedades graves. «Un millar de millones de ciudadanos están expuestos a concentraciones elevadas de poluantes atmosféricos». Según la OMS: «El aumento en los niños de las concentraciones de plomo en la sangre, así como la alteración de la función respiratoria está relacionados con las condiciones del medio». La tuberculosis, que Occidente considera como erradicada, condena cada año a tres millones de seres humanos y veinte millones están alcanzados por alguna forma evolutiva de la enfermedad. Esta enfermedad está agravada por la pobreza, la superpoblación, las viviendas insalubres y la falta de higiene.

El monopolio de los residuos

Para los países en vía de desarrollo, una mayor salubridad pasa por fuentes de energía menos nocivas con el fin de reducir las emananciones de carbón, gasolina o residuos agrícolas. La energía nuclear que aparecía como un paliativo idóneo, no resiste al análisis: altamente tecnológicas, las centrales son vulnerables y las consecuencias de un accidente muchas veces catastróficas. Y siempre se plantea el problema de los residuos radioactivos.

Sobre el tema de los residuos, un ejemplo: los países capitalistas de la OCDE (Europa, Canadá, EE.UU. y Japón) que sólo agrupan al 15 por 100 de la población mundial, producen el 77 por 100 de los residuos industriales peligrosos. Y el informe señala que la evacuación de este material hacia países del tercer mundo «no está acompañado, en la mayoría de las veces, de esfuerzos para tener en cuenta la salud de los pueblos».

Un tema que demuestra los «beneficios del capitalismo triunfante», y que merece reflexión para un proyecto de una nueva sociedad.

Ginebra, abril de 1992

FRANCIA

42º Congreso de la CFDT

El sindicalismo frente a su futuro

Manifestación de mineros en París.

LA CRISIS ESTÁ AHÍ: sólo el 10% de los asalariados del país están afiliados a un sindicato, cuando son un 34% en Alemania, y un 40% en Italia. Además, en los últimos diez años se produjo un bajón de más del 40%.

En ese contexto, el 42º Congreso de la CFDT* ha sido el lugar de un enfrentamiento entre dos concepciones radicalmente opuestas del sindicalismo: adaptarse al sistema, y colaborar con él, o trabajar para buscarle alternativas. La problemática no es nueva. Sin embargo nunca ha sido tan actual, tras el estrepitoso fracaso de los «socialismos» y ante la política del capitalismo europeo, japonés y norteamericano cuyas ambiciones e incluso intereses vitales acarrean una competición despiadada que puede tener terribles consecuencias sociales, políticas y militares.

Una historia breve pero densa

Nacida en 1964 a raíz de la desconfensionalización de la Confederación Frandesa de Trabajadores Cristianos (CFTC), e influenciada desde el principio por los vientos nuevos de la radicalización social en vísperas de mayo del 68, la Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) simbolizó durante años la búsqueda de vías renovadoras para el sindicalismo en Francia.

En efecto, su posicionamiento en pro de la unidad de acción con la CGT (el primer sindicato de Francia, el de mayores tradiciones de lucha de clase) no impedía un análisis crítico severo del seudo «socialismo» de la URSS y los países del Este de Europa, una denuncia de las prácticas antidemocráticas de los dirigentes de la CGT, de la concepción de este sindicato como una correa de transmisión del Partido Comunista Francés, así como del papel a menudo reaccionario de un aparato burocrático que gozaba (y sigue gozando) en determinados sectores de posiciones verdaderamente hegemónicas, de cogestión y aprovechamiento del sistema que pretende combatir (notemos que esa situación no es propia, ni mucho menos, de la CGT. Concierne a todas las centrales sindicales, cuyos lazos directos o indirectos con lo que se llamó en su tiempo la «aristocracia obrera» quedan todavía por estudiar).

Al mismo tiempo, y con la llegada a sus filas de elementos avanzados del 68 (el PSU y otras corrientes radicales) la CFDT se esforzó por analizar los cambios económicos y sociales del capitalismo de los años 70, y empezó a difundir el concepto de «socialismo autogestionario». Desempeñó un protagonismo esencial en una serie de luchas ejemplares de los trabajadores franceses en aquellos años (la de la LIP, por ejemplo, que desembocó durante largos meses sobre una interesante experiencia de autogestión de una empresa relojera, y que recibió el apoyo de los sectores más combativos de la sociedad francesa). Por fin cabe recordar que sus militantes fueron de los primeros que empezaron a denunciar los peligros ecológicos de las políticas industriales (nucleares, etc.).

Sin embargo, a partir de 1979 los socialdemócratas (que nunca habían sido combatidos claramente en el seno del sindicato) liderados por Edmon Maire empezaron a apoderarse de las riendas de la Confederación, y amparados en una política de demagogia, maniobras y expulsiones (a veces de secciones locales enteras), impusieron la colaboración y un sometimiento a los objetivos de la socialdemocracia, que pronto (en 1981) llegaría al gobierno para aplicar una política de recortes sociales sin precedentes desde la II Guerra Mundial. En 1988, en el congreso de Estrasburgo, y pese a la oposición de un amplio sector de la base, se abandonaba la referencia al «socialismo autogestionario».

Lo que se jugaba en París

Las intenciones de Jean Kaspar y la actual dirección confederal, con el 42º Congreso, eran claras: sentar definitivamente las bases de un sindicalismo reformista, de cogestión de un sistema que ya no se trata de cambiar sino de «humanizar» y «trasnformar desde el interior», e ir lo más rápidamente posible hacia la creación en Francia de un sindicato «mayoritario», copiando el modelo alemán del DGB. Para conseguir todo esto, tenían marcados una serie de objetivos:

- hacer adoptar por los delegados la economía de mercado como único sistema posible (y además «único garante de la democracia»).

- marginar a la CGT, por lo menos para los próximos años y desarrollar una serie de «convergencias» con las demás centrales sindicales «reformistas» (algunas de ellas verdaderamente amarillas).

- abandonar los métodos de «confrontación» (es decir de la huelga) en beneficio de la negociación «en frío».

- relegar la reivindicación de las 35 horas semanales a un tema negociable sólo en sectores determinados, caso por caso y no como objetivo central.

Al mismo tiempo, se trata de eliminar parte de las estructuras intermedias de los sindicatos (que garantizan un funcionamiento todavía relativamente democrático, con congresos departamentales, y constituyen una base a veces seria de oposición a su línea y prácticas autoritarias, etc.), e inaugurar una estrategia de sindicalización que privilegie la adhesión sindical por el patrón, quien recupera el cheque si el trabajador se niega a entregarlo al sindicato) y el empleo de «desarrolladores» profesionales para el reclutamiento.

La acción de la izquierda sindical

A lo largo de los meses precongresuales, la izquierda sindical (los «oposicionales») libró sobre los puntos que acabamos de citar una batalla de enmiendas que, pese a las maniobras de la comisión especializada (elección de los textos menos claros, etc.), dio lugar a una avalancha relativamente impresionante de críticas desde la misma tribuna del congreso y, a pesar también de las evidentes prácticas de «bloqueo de mandatos» desembocó sobre unas votaciones esperanzadoras. Ello cuando algunos sectores de la izquierda ni siquiera se presentaron al congreso, creyendo que todo estaba ya zanjado.

En primer lugar señalaremos que fue desbaratada la amenza inmediata de desmantelamiento de las estructuras departamentales, con más del 60% de los votos.

El rechazo de la economía de mercado obtuvo un 48%, la defensa de la coordinación y unidad de acción con la CGT, un 43%, el rechazo del «cheque sindical» un 41%, y la oposición a las principales resoluciones consiguió un 35% de los mandatos, lo que da una imagen de la oposición interna a la dirección confederal.

Una oposición relativamente coordinada para operaciones puntuales como los congresos, que dispone de bases bastante sólidas en algunas federaciones (transportes, sanidad, finanzas, textil y enseñanza) y regiones (Baja Normandía, etc.) y que lleva a cabo una serie de experiencias interesantes. Cabe notar también que al lado de las prácticas ya descritas, los «oposicionales» de la CFDT han tomado una parte activa en las distintas movilizaciones contra el racismo y el fascismo, así como contra la guerra del Golfo, etc.

Pero la situación actual exige pasar a niveles superiores. La dirección de la CFDT, en el marco de la europeización de su estrategia (ocupar de la CES un lugar equivalente al de la CISL o el DGB) acelera los procesos de recomposición, y está obviamente dispuesta a emplear cualquier método radical, aprovechando la crisis real que atraviesa el sindicalismo en Francia.

Táctica actual del sindicalismo reformista

Está claro que los dirigentes de la CFDT están decididos a deshacerse de un sector oposicional que, si bien representa lo más activo de la militancia, constituye un obstáculo serio a sus planes. No sólo no van a tener en cuenta los resultados de las votaciones, y admitir por ejemplo una representación democrática y proporcional de la oposición, sino que pueden estar preparando maniobras escisionistas o de expulsiones masivas. Es lo que está pasando con la gran central sindical de la enseñanza (FEN), cuyos dirigentes socialdemócratas están a punto de expulsar de sus filas a dos (como mínimo) sindicatos nacionales (el SNES en particular) que representan más del 40% de la Federación, y con los que la dirección de la CFDT está abiertamente compinchada para operar una nueva «recomposición», una vez liquidada la federación cedetista de la enseñanza (el SGEN-CFDT, mayoritariamente oposicional pese a su carácter a menudo «centrista»).

Una alternativa global

Nadie debe engañarse: los defensores del sindicalismo reformista pueden conseguir algunos «triunfos» pasajeros. Incluso pueden ganarse afiliados con los sistemas que preconizan. Pero no serán capaces de hacer frente a las situaciones difíciles que golpean o esperan a los millones de asalariados de nuestros países, en primer lugar a los más precarios pero también a los que caen víctimas de las reestructuraciones por su edad, su «falta de competitividad» por la competencia alemana o japonesa, etc. Los motivos «realistas» de tales medidas no faltarán en los próximos años. Y los que se dan por objetivo estratégico «acompañar al sistema», negociar y presionar para que «evolucione», ya que, según ellos, «pasó el tiempo de las utopías», no tienen mucho porvenir fuera del que quieran darles los patronos más comprensivos del país.

A no ser que tengan ellos la capacidad de explicarnos en virtud de qué la sociedad capitalista actual puede transformarse en una sociedad verdaderamente humana, sin las monstruosas desigualdades y marginaciones, sin los peligros de explosiones de racismo y de fascismo, o de conflagraciones militares.

Se trata pues para la izquierda sindical de estructurarse mejor, en torno a un esfuerzo por coordinar y desarrollar no sólo las luchas más avanzadas, por encima de las divisiones de siglas, sino también en torno a iniciativas apuntando a profundizar el análisis de las evoluciones de la sociedad en la que vivimos. Desdibujar un proyecto alternativo al sistema capitalista, en el cual de meros figurantes, los trabajadores de todos los sectores empiecen seriamente a desempeñar un papel de actores en la organización del trabajo, de la producción y del reparto de las riquezas sociales.

Los contactos que se desarrollan ya en torno a las reuniones y la revista *Collectif*, con militantes de la CGT, la FEN y otros sindicatos representan unos pasos indudablemente positivos. Ahora cabe también plantearse el reforzar los lazos con sindicalistas de los demás países europeos, en un primer momento con el intercambio de revistas, artículos, etc., y aprovechar los encuentros que ya se van realizando para avanzar.

* Celebrado en París del 7 al 10 de abril.

J.P. PETIT
(Delegado sindical en el 42º Congreso de la CFDT)

Para avanzar

28 de mayo: respuesta insuficiente, pero única respuesta organizada.

Toda movilización, su preparación, su concreción, sus resultados y su prolongación conforman un momento especial de la manifestación de la lucha de clases, en la que los comunistas debemos tensar las fuerzas. Así ocurre con el paro general del 28 de mayo.

No nos parece superfluo reseñar, brevemente, la ofensiva sostenida en los últimos años por parte de las grandes burguesías europeas, y sus gobiernos de turno, contra todos los sectores y segmentos de los asalariados. Ofensiva que, ante las políticas defensivas del movimiento obrero, se convierten en una salvaje embestida a partir de Maastricht. Embite antiobrero y antidemocrático, traducido en unas políticas de ajuste durísimo, y que vienen en llamar "convergencia" o "planes de convergencia".

Que tales políticas antidemocráticas en el Estado español adquieran caracteres de medidas tercermundistas a nadie extraña, dada la situación de partida: a la cosa de las economías europeas, escaso desarrollo de la democracia formal, déficits en infraestructuras, mayores desigualdades sociales, carencias en servicios sociales, etc. Y a nadie se le escapa esta realidad por muchos escaparates exposicionales, olímpicos y culturales que monten los actuales gobernantes.

Nadie pone en duda, tampoco, que la respuesta obrera, social y política contra el desmantelamiento industrial, contra el recorte del gasto público sólo y exclusivamente en base a la mayor desatención, reducción y privatización de los servicios sociales esenciales, contra el cercenamiento brutal de las libertades públicas, que el PSOE protagoniza, debiera ser contundente y organizada por y desde la izquierda.

Los problemas de la limitación de la respuesta son tan políticos como real es la situación que vivimos, y no meramente técnicos como algunos pretenden.

La respuesta debiera tener el alcance más próximo posible a una *Huelga General política*. Pero ¿quién o quiénes la convocamos? ¿Había condiciones o/y simple predisposición a ello? He ahí el primer problema clave.

Frente a la necesidad de un tipo determinado de respuesta global, nos encontramos con un concreto y particular llamamiento de movilización, emprendido por los dos sindicatos considerados de clase y mayoritarios. Llamamiento que está siendo contestado desde dentro de CC.OO. y UGT y también desde fuera por insuficiente: despolitizado, reformista.

Pero no es menos cierto que es la única respuesta organizada desde la izquierda contra la política del PSOE, a pesar de todas las limitaciones que el dominio reformista impone al sindicalismo vigente.

Y también es cierto que, pese a todas sus limitaciones –que no ensalzamos ni aplaudimos, sino tan sólo constatamos– la movilización convocada permite un amplio juego político: enfrentamiento con y desenmascaramiento de las posiciones reaccionarias del PSOE, demostración de la cortedad de miras del sindicalismo reformista, etc.

Mas es momento de preguntarse: ¿y después del 28 de mayo, qué?

Algún avance en el desgaste del PSOE de la coyuntura y actúe certeramente. Por la sencilla razón de que desde la izquierda, atomizada y dividida en distintos partidos, movimientos sociales, etc., no somos capaces de elaborar y articular un proyecto político unitario que rentabilice en todos los terrenos –incluido el electoral– el descontendo social existente.

Ahora bien, si no somos capaces de avanzar en la articulación de una respuesta global desde la izquierda (constitucionalista o no, reformistas y radicales, verdes y rojos, etc.) estaremos dejando el camino libre a la consolidación del bloque constitucionalista de derechas, que hoy capitanea el PSOE, y que responde a los intereses exclusivamente de los granburgueses.

No por ser evidente lo que estamos diciendo aparece en el primer plano de la preparación del 28 de mayo. En primer lugar por las posiciones prepotentes de unos, las exclusivistas de otros y las protagónicas de la mayoría de fuerzas de la izquierda. En la práctica, además, se ve boicoteada la suma de fuerzas de izquierda por dos corrientes (desiguales en su fuerza organizada y política, y por tanto en su importancia, pero que convergen en restar fuerzas): una que con distintos ropajes y ritmos conduce a la "casa común" del aparato del PSOE, otra que haciendo gala de un marginalismo con tintes de radicalismo conduce a parte del movimiento a la inoperancia efectiva.

Entendemos que la preparación del 28-M y el paro general de ese día han de ser el punto de arranque para un amplio debate social y político en torno a la necesidad impostergable de construir una alternativa global radicalmente enfrentada a las políticas dominantes, ejecutadas aquí por el PSOE. Alternativa global en la que deben quedar recogidos los mínimos comunes de la diversidad de tendencias existentes en el arco sociopolítico de la izquierda, caracterizadas por oponerse al neoliberalismo en lo económico y a la fascistización en lo político. Oposición, repetimos, que es desigual en todas y cada una de las corrientes de la sociedad y con distintos referentes en lo político, sindical, social, etc. La tarea es, pues, ingente y requiere de un gran tacto por parte de todas y todos para sacar el mínimo programa común que sea capaz de aglutinar lo existente, movilizar consecuentemente y generar más fuerzas para hacer factible una alternativa a corto plazo, que conecte con una salida a medio plazo y que enfrente los futuros retos de una verdadera transformación económica, política y social.

[Núcleos promotores de Sevilla y Andalucía por un Proyecto Comunista Democrático.

Ante la intervención policial contra el Congreso de JARRAI

Comunicado de condena de la JCE (m–l)

La Juventud Comunista de España (marxista–leninista) condena la reciente intervención policial contra el V Congreso de JARRAI, que supone un paso más en la utilización de la represión para mediatizar e impedir el libre ejercicio de los derechos democráticos de reunión, asociación y expresión, y la apuesta por el recurso policial y la criminalización como fundamental vía de acoso y respuesta a las reivindicaciones y aspiraciones políticas de una parte sustantiva de la juventud y el pueblo de Euskadi.

¡Por el libre ejercicio de los derechos democráticos de la juventud!

¡Por el derecho a la autodeterminación para Euskadi y las nacionalidades históricas del Estado!

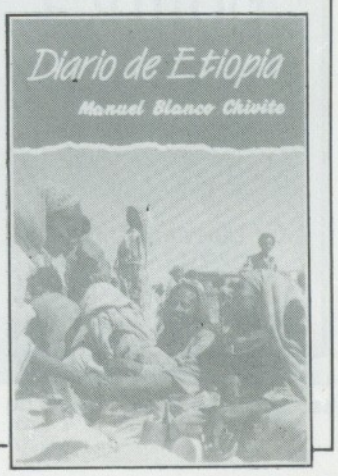
18 de Mayo de 1992

EDICIONES VOSA

Diario de Etiopía

MANUEL BLANCO CHIVITE

El autor estuvo en Eriopía en enero de 1991, conviviendo con los guerrilleros del Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope, que pocos meses después tomaron el poder en Addis Abeba. Especial interés tienen sus conversaciones con el entonces dirigente de las fuerzas fuerrilleras y hoy presidente de Etiopía, Meles Zenawi.



EDICIONES V.O.S.A.

ciencias sociales
poesía
narrativa
teatro
economía
política
historia

C/ Libertad, 7, 3º dcha.
28004 MADRID
Tlf: (91) 532 76 66
FAX: (91) 531 83 58

Cómo el FMI gobierna la India

En uno de los trabajos sobre el análisis económico internacional presentado en nuestro reciente congreso, señalamos que «las instituciones transnacionales del capital financiero -FMI y Banco Mundial- constituyen hoy un nuevo poder colonial que impone sus dictados a lo largo y ancho del planeta». Un reportaje publicado en el mensual francés "Le Monde Diplomatique" (número de abril de 1992) sobre la actual situación económica y social de la India nos proporciona una serie de informaciones que nos permitirán ilustrar esa tesis.

«Garantía para el FMI: 47 Tm. de oro indio depositadas en el Banco de Inglaterra».

La situación de endeudamiento de la India se ha agravado brutalmente, tras la guerra del Golfo, que se acompañó de la expulsión de cientos de miles de emigrantes indios que trabajaban en la zona del conflicto y se sumaron, de vuelta a su país, a la larga lista de los parados, al mismo tiempo que se cortaban las remesas de esos emigrantes a sus familias, que representaban en conjunto un importante alivio para la balanza de pagos.

El llamamiento del Gobierno a una ayuda urgente de los países desarrollados no logró los resultados esperados: tras la multimillonaria guerra del Golfo y con la apertura de los nuevos mercados de los países del Este no era el momento -ni lo es ahora- para el imperialismo de aumentar sus créditos a países del Tercer Mundo como la India, sino todo lo contrario: exigirles mayor puntualidad en la devolución de su deuda externa y mayores sacrificios a sus pueblos para sacar de sus menguadas economías los sustanciales excedentes comerciales que tal exigencia conlleva.

Al Gobierno de la oligarquía india, que no podía ni quería plantearse una política de ruptura con las exigencias del imperialismo, no le quedó más remedio que firmar el pasado otoño un acuerdo con el FMI, al que siguió, en diciembre, la concesión de un préstamo del Banco Mundial, bajo modalidades y condiciones que permanecieron **secretas**, pero que implican, a juzgar por sus efectos públicos, no sólo una total enajenación de la independencia nacional del país, sino la entrega directa de la dirección y control de su política económica a los expertos de esas organizaciones internacionales.

El primer acto de sumisión del Gobierno indio, en julio de 1991, consistió en depositar como garantía 47 toneladas de oro en las arcas del Banco de Inglaterra.

Los expertos del FMI no sólo elaboraron las grandes líneas de la nueva política económica del Gobierno –reducción de gastos sociales y de infraestructuras, supresión de las subvenciones estatales, privatización de empresas públicas, liberalización del comercio exterior y de las inversiones extranjeras, etc.–, sino que vigilan su aplicación concreta a través de un sistema informatizado instalado en el mismo Ministerio de Finanzas. Ante ellos y sus superiores en Washington tienen que rendir cuentas el ministro, y no ante el Parlamento indio. Este tuvo que aprobar un presupuesto que reproduce fielmente un documento de orientación elaborado, meses atrás, por el Fondo, cuyos representantes llegan hasta redactar personalmente -su discreción les prohibe firmarlos- algunos de los documentos básicos de los ministerios económicos.

Niños durmiendo en las calles de la ciudad india de Bombay.

¿Qué objetivos persigue el actual Gobierno-FMI y sus fieles agentes de la oligarquía nativa? Oficialmente, restablecer los equilibrios externos del país, con el fin de sacarlo, a costa de duros sacrificios, de su actual situación de bancarrota. Bajo tales criterios, los primeros resultados van en dirección contraria: inflación multiplicada y agravación del déficit de la balanza de pagos, como consecuencia del mayor coste de las materias primas importadas y del aumento de las importaciones de los artículos de lujo por las clases dominantes.

Pero tras los objetivos proclamados, la política monetarista y neo-liberal del FMI persigue otros de mayor importancia para el imperialismo: cuando se planifica la desaparición de 4 a 8 millones de empleos en los tres próximos años, cuando se desmantela sistemáticamente a sectores tan importantes como el textil (que reducirá sus efectivos en una tercera parte) y el automóvil es para permitir a las multinacionales saquear aún más al país y adueñarse totalmente de un mercado de cerca de 900 millones de habitantes, en unos momentos en los que la depresión en los países desarrollados les impulsa a «exportar su recesión» hacia países como la India.

Las recetas del Gobierno-FMI son del agrado de la oligarquía india, ya que le permiten aumentar aún más su feroz explotación y, por ende, sus beneficios. Al plantear la abrogación de la legislación sobre el salario mínimo y la protección del poder adquisitivo de los salarios, el Plan del FMI supone un abaratamiento de los costes de producción que saludan con entusiasmo los representantes de la patronal: «Los precios de la alimentación han aumentado, el coste de la mano de obra en dólares ha disminuido, somos más competitivos y compartimos nuestros beneficios con nuestra clientela en el extranjero».(1)

Un entusiasmo que tiene su criminal contrapartida en la agravación de la situación de las amplias masas, tanto en la ciudad como en el campo. En un país en el que los recursos de que disponen cientos de millones de trabajadores -que cobran muy a menudo el equivalente de ¡25 pesetas diarias!- constituyen el mínimo absoluto para poder sobrevivir, un plan como el que está aplicando el FMI significa nada menos que el exterminio de los sectores más desprotegidos de la población. La hambruna se está extendiendo en regiones en las cuales no había vuelto desde la Independencia. Según la prensa local, en el espacio de un poco más de dos meses en sólo dos distritos del Andar Pradesh se han registrado 73 casos de muerte por hambre. De esas muertes -¿cuántas más habrá en todo el país?- son responsables los tecnócratas que se encargan de «vigilar» desde la sala de ordenadores del Ministerio de Finanzas y, aún más, sus patronos, los banqueros que acuden a las reuniones en la sede del FMI en Washington; o sea, la flor y nata de nuestras muy civilizadas burguesías de Occidente.

O. H.

(1) Entrevista con un exportador de diamantes citada en "Le Monde Diplomatique".

Los acuerdos de Maastricht no pueden favorecer a los trabajadores

Cuando en numerosos países europeos la discusión sobre la ratificación de los acuerdos de Maastricht en los mismos Parlamentos de la burguesía está poniendo de manifiesto la existencia de serias reservas y oposiciones hacia dichos acuerdos por parte de distintas fuerzas políticas, de izquierda y hasta de derecha, y cuando en las encuestas efectuadas en distintos países un sector que llega a representar hasta la mitad de la opinión pública no acepta pronunciarse a favor de la Europa de Maastrich, resulta asombroso ver cómo en España, en unos momentos en los que se plantea dar una respuesta contundente a los primeros golpes -«Decretazo» y plan de convergencia- que la burguesía y su gobierno pretenden asestar a los trabajadores al amparo de los acuerdos, los responsables de los partidos de izquierda y de los sindicatos se quedan a mitad de camino a la hora de pronunciarse sobre el fondo del problema. Es que, tras haber sembrado tantas ilusiones en el pasado sobre la «Europa social» y hasta la «Europa de los pueblos», a algunos les puede costar analizar con rigor la cruda realidad de Maastricht desde una perspectiva de clase, y a lo mejor les resulta más fácil cargar toda la responsabilidad en el gobierno felipista.

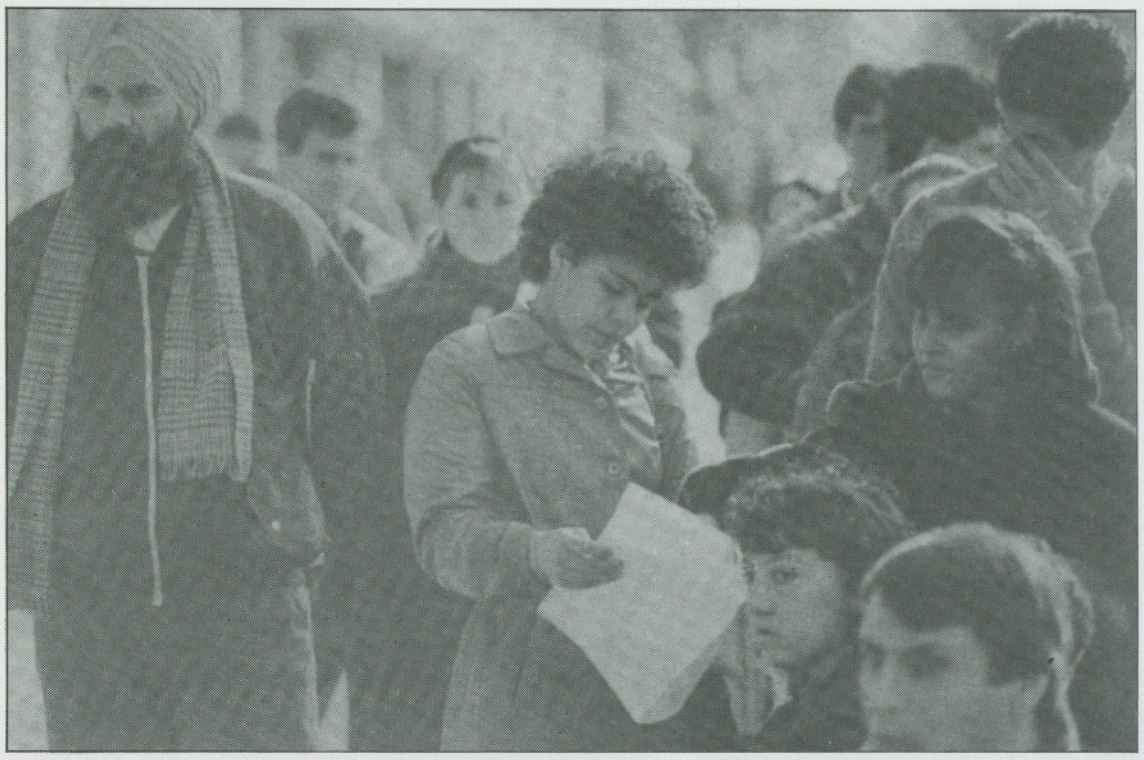
Nada más alejado de nuestras intenciones que disculpar a éste último, pero cuando anuncia una drástica reducción del déficit público a través del recorte de toda una serie de presupuestos de carácter social, como los subsidios de paro, se comporta como un fiel intérprete de los acuerdos firmados en Maastricht por los representantes de todas las burguesías europeas, en los cuales se contempla la progresiva unificación de las políticas económicas en todos los países adheridos, en base a los criterios logrados por los de mayor desarrollo capitalista en términos de inflación, déficit público, endeudamiento público y tipos de interés.

Este aspecto de los acuerdos, el de mayor trascendencia en el terreno socio-económico, tiene una doble consecuencia: por un lado, la determinación de las coordenadas fundamentales de las políticas económicas seguidas en cada país deja de ser responsabilidad exclusiva de sus respectivos gobiernos para recaer en organismos supranacionales como el Consejo de Ministros Europeo y el Consejo de Gobernadores del futuro Banco Central, muy alejados de toda posibilidad real de control democrático por parte de la opinión democrática y de los pueblos de Europa. Por otro lado, la convergencia económica, condición *sine qua non* del paso a la etapa siguiente de la U.E.M., ha de traducirse, sobre todo en los países más desfasados en ese terreno, en un endurecimiento de las políticas antipopulares -bloqueo de los salarios para contener la inflación, recorte de gastos sociales para contener el déficit público, privatización de empresas estatales para aminorar la deuda estatal- con un previsible aumento del paro y consecuencias recesionistas sobre el conjunto de la economía. Empiezan a darse a conocer algunos estudios prospectivos de organismos especializados, como el que el Observatorio Francés de Conyuntura Económica acaba de dedicar a Italia, que explican las reservas que incluso sectores de las burguesías europeas manifiestan a la hora de dar su adhesión a los acuerdos de Maastricht. Para homologarse a lo estipualdo en Maastricht, la economía italiana, según el estudio citado, tendrá que someterse a un plan de austeridad que se truducirá, de aquí a finales de este siglo, en un descenso del PIB de un 5% (1).

Pero las burguesías de Italia, España, etcétera, en su mayor parte, están dispuestas a pagar tal precio, o, mejor dicho, a que lo paguen sus trabajadores, para que les den su entrada en el futuro Consejo de Administración de los intereses unificados -dentro de lo posible- de la burguesía europea, para poder, junto con las de Alemania, Francia, etcétera, explotar mejor a sus pueblos y disputar a sus rivales norteamericano y japonés la hegemonía mundial. Estos y no otros son, en esencia, los grandes ideales a los que sirven los acuerdos de Maastricht. Embellecerlos e intentar ocultar su sello de clase es confundir a los trabajadores en los momentos en los que se movilizan masivamente contra sus consecuencias.

D. H.

(1) "Le Monde", 16 de mayo de 1992.



Un grupo de inmigrantes, por las calles de una ciudad española.

El «modelo» alemán, en tela de juicio...

[Viene de página 12] De la experiencia que están viviendo en los últimos meses y años, los trabajadores están sacando conclusiones que tienen que cuestionar algunos de los fundamentos en los que se basaba el tan alabado «modelo» alemán: la colaboración de clases institucionalizada en el marco de la «economía social de mercado», el consenso para construir la «gran Alemania», etc. Esa gran Alemania, cuyo desenfrenado expansionismo está suscitando las agrias críticas de todos sus rivales imperialistas -ver la no resuelta querella sobre los tipos de interés- no se basa sólo en la superexplotación de la mano de obra barata de la cual los konzerns se aprovechan en países como Méjico, China, España, Checoslovaquia, etcétera (seguimos con el ejemplo de la Volkswagen). Necesita ya pedirle sacrificios a esa clase obrera del país, hasta ahora relativamente privilegiada, máxime cuando el coste de la reunificación supera todas las previsiones y lleva camino de seguir pesando durante años, tanto o más como ahora, sobre el erario público.

En esas condiciones, las conclusiones para los trabajadores alemanes saltan a la vista: cuando las cuentas de resultados de los monopolios registran récords históricos y tras el impuesto de solidaridad del 7,5% sobre las rentas salariales decretado por el Gobierno Kohl para financiar la reunificación(4) y las sucesivas reestructuraciones de plantillas anunciadas por los konzerns, éstos, junto con el Gobierno en lo que toca a la Administración pública, se niegan a ofrecer más que un miserable 3 ó 4% para los convenios del año en curso, lo cual, teniendo en cuenta la inflación que se está disparando últimamente, significa un claro deterioro del poder adquisitivo de los salarios.

De ahí que, a pesar de los esfuerzos desplegados sobre todo por la social-democracia, cogestor de los intereses de la burguesía en numerosas Administraciones regionales y por los dirigentes reformistas de los sindicatos, el movimiento huelguístico haya tomado el carácter de un enfrentamiento político entre la burguesía y los trabajadores, que se niegan a apuntalar con sus sacrificios las ambibiciones expansionistas de ésta última, y que las concesiones que se ha visto obligado a hacer el Gobierno Kohl ante la huelga de los funcionarios -muy por debajo, por cierto, de lo que hubiese podido lograr, como lo demuestra el voto de rechazo de los trabajadores hacia los sindicatos firmantes del compromiso- hayan sido percibidas como una derrota política para ese gobierno imperialista: una grieta, todavía pequeña, pero que las próximas luchas de clase pueden ir ensanchando, se ha abierto dentro del macizo edificio de consenso y paz social en el que se había basado hasta ahora el «modelo» alemán. •

DANIEL HARDY

(1) Estas líneas se están redactando el 16 de mayo.

(2) "Le Monde Diplomatique", marzo de 1992.

(3) "Le Monde", 5 de mayo de 1992.

(4) Según cifras del sindicato IG-Metal, de los 90.000 millones de marcos

Miembro de un piquete informativo, en un aparcamiento de autobuses en el Belín occidental.

¡Proletarios de todos los países, uníos!

Vanguardia Obrera

Depósito Legal: M 6836–1986

PRECIOS EN EL EXTRANJERO:
ALEMANIA: 1,70 DM; BELGICA: 30 FB; FRANCIA: 8 FF;
HOLANDA: 1,75 Fl; INGLATERRA: 30 p.; SUIZA: 1,50 FS

Los Ángeles (EEUU)

El ejército en las calles: 58 muertos

«... Un coche que intentó forzar una barrera levantada por la Guardia Nacional fue acribillado a balazos por tres soldados. Su conductor, un joven de 28 años, resultó muerto» ("El Mundo" del 6 de mayo).

En Los Angeles (L.A. para sus habitantes) hubo 58 persona asesinadas por la policía, la Guardia Nacional y el ejército. Un Tienanmen norteamericano.

Si quienes se enfrentaron al ejército chino en la tristemente famosa plaza de Pekín eran, según la prensa de EEUU y de todo Occidente, jóvenes luchadores por la democracia, el pueblo negro y latino en rebelión en L.A. no eran sino bandas de gánsters juveniles, asaltantes y desalmados. Así escriben ellos la historia una vez más.

Ahora bien, quedan en el aire dos preguntas obvias: ¿por qué la rebelión de L.A?; ¿quién mandó disparar a matar, quién mato y en qué cárcel están detenidos los asesinos?

A la primera puede responderse con facilidad. En EEUU hay 30 millones de pobres: un norteamericano de cada diez recibe ayuda para ¡poder comer!

Durante las últimas administraciones republicanas (Reagan y Bush) las ayudas sociales han disminuido en las grandes ciudades entre un 60 y un 70%. Primero Reagan y luego Bush y los suyos explican que el descenso de las prestaciones sociales incentiva a los pobres a luchar por la vida y a buscar trabajo. Según ellos, el paro es un invento de los parados. Algo así nos contó recientemente en España Carlos Solchaga.

Respecto a la segunda cuestión, desconocemos las respuestas. Al parecer, en Los Angeles no ha pasado nada. Nadie ha muerto y nadie ha matado. En L.A. uno se pone un uniforme y puede asesinar y ciscarse en todos los derechos humanos. Matar negros en EE.UU. sigue estando permitido.

Un grupo de policías detiene a un joven en la ciudad de Los Angeles.

El «modelo» alemán en tela de juicio

Los actuales movimientos huelguísticos en Alemania –los ya pasados de los trabajadores de la función pública, y los anunciados(1) en el metal, artes gráficas y construcción– nos vuelven a recordar una realidad que, por muy evidente que sea, es con harta frecuencia ocultada o menospreciada hasta por los propios marxistas: la existencia, en Alemania como en todos los países capitalistas, incluso los más prósperos, de clases sociales enfrentadas y de una amplia mayoría de trabajadores explotados, que pueden llegar a tomar consciencia que sus intereses no coinciden con los de la burguesía imperialista, y a actuar con resolución para defenderlos.

Cientos de miles de trabajadores alemanes se manifestaron durante el Primero de Mayo.

Algunas cifras recogidas en un estudio de reciente publicación(2) pueden dar una idea de la amplitud de la ofensiva desarrollada por los konzerns en esas tres direcciones: con la reunificación no sólo se han ganado, de golpe y casi en exclusiva, un nuevo mercado de 17 millones de habitantes, hundiendo la mayor parte del anti-guo tejido industrial de la RDA, pero además tienen asegurados para los próximos años unos contratos financiados con fondos públicos, estimados en la astronómica cifra de 200.000 millones de marcos (más de 10 billnes de pesetas), para la rehabilitación de sus infraestructuras económicas. Pero, al mismo tiempo, han duplicado en un año -29.400 millones de DM en 1990, frente a 14.700 en 1989- las inversiones destinadas a ampliar sus cotas de penetración en los mercados norteamericano, japonés y de los demás miembros de la CEE, y Alemania está asegurando, con 75.000 millones de DM, el 60% del total de la ayuda occidental a la CEI (ex URSS).

«...el coste de la reunificación supera todas las previsiones y lleva camino de seguir pesando durante años».

El plan de inversiones aprobado por una de las mayores multinacionales del país, la Volkswagen, para los años 1992-196 incluye todos ios componentes ya citados: 7.000 millones de DM para la ampliación de la producción de las fábricas checoslovacas Skoda y Baz, adquiridas en los últimos meses, 3.500 para la nueva planta de Mosel (ex RDA), 11.000 para la nueva planta de la Seat en Martorell y la modernización de las demás, más lo que se dedique a sus nuevas fábricas en China y Portugal..., más los 25.000 millones de DM que se tendrá que gastar para la modernización de las unidades de producción de la Volkswagen y de Audi en la misma Alemania Occiental, porque el plan citado(3) se basa en un aumento de las ventas de la multinacional alemana de un 33% en los próximos años, cuando se prevé que el mercado mundial no se ampliará en más de un 15%, lo que implica, para desplazar a sus competidores, aumentar la productividad, reducir costes, y en particular costes salariale; junto con esas millonarias inversiones, la Volkswagen acaba de anunciar una reducción de efectivos en Alemania de 2.500 puestos de trabajo (uno de cada 10) en los próximos cinco años. Tan brutales medidas habían sido anunciadas por la Mercedes-Benz hace algunas semanas. **[Sigue en página 11]**